

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

TN/TE/R/6

12 de junio de 2003

(03-3073)

**Comité de Comercio y Medio Ambiente
en Sesión Extraordinaria**

INFORME RESUMIDO DE LA SEXTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA

1º Y 2 DE MAYO DE 2003

Nota de la Secretaría¹

1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) en Sesión Extraordinaria celebró su sexta reunión los días 1º y 2 de mayo de 2003 con arreglo al orden del día establecido en el aerograma de convocatoria (WTO/AIR/2071). Presidió la reunión la Embajadora Yolande Biké, de la República Gabonesa. El CCMA en Sesión Extraordinaria había enviado una invitación con carácter *ad hoc* a seis acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA)² y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), todos los cuales asistieron a los debates celebrados de conformidad con el apartado i) del párrafo 31. Las delegaciones dieron la bienvenida a los invitados *ad hoc* y les agradecieron su participación constructiva.

I. APARTADO i) DEL PÁRRAFO 31 – NORMAS DE LA OMC Y OBLIGACIONES COMERCIALES ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS EN LOS AMUMA

2. La Presidenta indicó que, en este punto del orden del día, los participantes habían enviado los cuatro documentos nuevos siguientes: el documento TN/TE/W/26, del Japón, el documento TN/TE/W/28, de Hong Kong, China, el documento TN/TE/W/29, de Malasia, y el documento TN/TE/W/31, de las Comunidades Europeas (CE). Además, la Secretaría había distribuido dos documentos: el documento TN/TE/S/3/Rev.1, titulado "Compilación de comunicaciones de conformidad con el apartado i) del párrafo 31", y el documento TN/TE/S/5, titulado "Matriz de las medidas comerciales adoptadas en el marco de determinados AMUMA". Las delegaciones presentaron sus documentos y se produjeron los debates recogidos a continuación.

El camino a seguir

3. El Brasil, México, Tailandia, Pakistán, Malasia, Indonesia, la Argentina, Corea, el Perú, y Filipinas respaldaron el llamamiento de Hong Kong, China, a examinar las obligaciones comerciales de los diversos AMUMA de una manera sistemática. El Brasil y el Perú adujeron que identificar los

¹ El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.

² El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea), el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Protocolo de Montreal) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

AMUMA que serían analizados en la próxima reunión facilitaría la determinación de qué AMUMA habían de ser invitados con carácter *ad hoc* a esa reunión. El Brasil, Nueva Zelandia, el Perú, Tailandia, y Filipinas propusieron que se concediera prioridad inicialmente al Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Pero el Perú añadió que deberían tenerse presentes los seis AMUMA propuestos por los Estados Unidos. México afirmó que era flexible con respecto a si se debía comenzar con los tres AMUMA que habían entrado en vigor o bien con los seis propuestos por los Estados Unidos. Tailandia pidió que los tres AMUMA que habían entrado en vigor compartieran su experiencia sobre ejecución e incumplimiento con el CCMA en Sesión Extraordinaria. El Canadá señaló que no tenía objeciones a comenzar a trabajar con los tres AMUMA que habían entrado en vigor. Aunque estaba dispuesto a examinar los seis AMUMA propuestos por los Estados Unidos, era partidario de tener en cuenta una cantidad aún mayor de AMUMA. China indicó su preferencia por una manera de proceder práctica y analítica, prestando la debida atención a la dimensión de desarrollo. La Arabia Saudita afirmó que los seis AMUMA propuestos por los Estados Unidos eran el número mínimo de acuerdos que había que estudiar y que en los debates debían incluirse las decisiones, los anexos y los protocolos de sus Conferencias de las Partes.

4. Los Estados Unidos indicaron que eran flexibles con respecto a que el CCMA en Sesión Extraordinaria comenzara centrándose en los seis acuerdos que habían identificado previamente o en los tres mencionados por el Brasil. Señalaron que había un grado considerable de entendimiento común entre las delegaciones en sus análisis de las obligaciones comerciales específicas (OCE), pero subrayaron que de hecho no era necesario alcanzar un consenso definitivo sobre la gama completa de OCE. La finalidad de la evaluación colectiva era simplemente servir de punto de partida para el intercambio de opiniones y experiencias sobre la relación entre las OCE y las normas de la OMC. Australia creía que los seis AMUMA fijados por los Estados Unidos probablemente fueran los únicos acuerdos que contuvieran OCE. El resto de los acuerdos o bien 1) no eran multilaterales, 2) su finalidad principal no era la protección del medio ambiente, o bien 3) no contenían OCE. Coincidió con el Brasil en la necesidad de un enfoque más estructurado para el trabajo del CCMA en Sesión Extraordinaria y con los Estados Unidos en la necesidad de compartir las experiencias sobre negociación y cumplimiento de las OCE como el camino a seguir. Instaba a los interesados a participar también en el intercambio de experiencias.

5. Suiza, Noruega y Polonia indicaron que no eran partidarios de elaborar una lista de las OCE y propugnaban un enfoque más conceptual sobre la identificación de estas medidas. Las Comunidades Europeas afirmaron que era hora de dejar de debatir sobre si se había de aplicar un enfoque analítico, por AMUMA, o un enfoque conceptual/basado en definiciones. Adujeron que un examen de cada AMUMA no tenía por qué impedir un debate paralelo sobre cuestiones conceptuales y sostuvieron que todas las comunicaciones realizadas hasta ese momento se basaban en una combinación de estos enfoques. Añadieron que la elaboración de una "lista" de OCE no aportaría una respuesta a las preguntas conceptuales, como qué habría de hacerse con los futuros AMUMA, si se debían incluir o no los acuerdos regionales y cómo tratar la cuestión de la "discrecionalidad" en la definición de las OCE. Sin embargo, afirmaron que las delegaciones debían comenzar a plantearse en qué fase debían compilar las diferentes opiniones expresadas. En respuesta a las CE, Australia aclaró que no quería dar a entender que hubiera que poner en marcha un nuevo proceso, sino que las cuestiones conceptuales que las CE y otros seguían planteando no entraban en el mandato. Adujo que un enfoque conceptual no podía diseñarse en el vacío y requería un sostén práctico. El Japón coincidió con las CE en que resultaría difícil alcanzar un consenso sobre una lista de OCE. Eso no significaba que no considerara útil el intercambio de experiencias, al contrario, pero quería que ese trabajo se combinara con un debate conceptual.

6. Nueva Zelandia afirmó que en ese momento no había cuestiones urgentes de procedimiento ante el CCMA en Sesión Extraordinaria. Al comenzar las negociaciones había inquietud acerca de un posible desequilibrio entre el enfoque que Australia y Nueva Zelandia habían propuesto y el de los

interesados, pero esa inquietud había desaparecido. Nueva Zelandia creía que se había progresado en diferentes elementos del mandato. En cuanto a los AMUMA, consideraba que se era más partidario de una lectura restrictiva, aunque no creía que esta cuestión requiriera llegar a una conclusión definitiva. En lo referente a las OCE, al parecer había un consenso sobre las medidas de las CE y el Japón correspondientes a la categoría 1). Se había propuesto una ampliación útil del debate con la inclusión de medidas como las notificaciones y los reglamentos técnicos, pero afirmaba que no era necesario llegar a un acuerdo formal sobre la expresión, puesto que bastaba con establecer la gama de OCE existentes. En cuanto a la expresión "establecidas en los AMUMA" y el debate sobre las decisiones de las Conferencias de las Partes, una vez más afirmó que la opinión de la mayoría tendía a ser restrictiva. La expresión "entre las partes" era sumamente importante y en su opinión requeriría un trabajo mucho mayor. Nueva Zelandia era flexible con respecto a la cuestión de si el CCMA en Sesión Extraordinaria debía tratar en su próxima reunión los seis AMUMA o sólo tres, o incluso únicamente la CITES. Sin embargo, señalaba que el presente debate debía celebrarse "sin perjuicio". Advertía que, una vez superado determinado punto, el trabajo sobre las OCE daría cada vez menos resultados, puesto que el CCMA en Sesión Extraordinaria no estaba negociando el significado de esas OCE. Lo que se estaba examinando era la aplicabilidad de las normas de la OMC entre las partes en los AMUMA. Creía en la aplicación de un enfoque conceptual que estuviera firmemente basado en acuerdos y disposiciones concretos y abogaba por un posible cambio de prioridad en relación con las cuestiones implícitas en el mandato: 1) las cuestiones que han surgido al adoptar medidas comerciales de conformidad con las OCE en relación con las normas de la OMC, y 2) lo que dichas cuestiones indicaban acerca de la dirección que debían tomar las negociaciones. Egipto coincidió con las CE en que el camino a seguir debía consistir en una combinación de los dos enfoques. La India dijo también que sería difícil deslindar ambos enfoques, pero abogó por un enfoque más estructurado y basado en el intercambio de experiencias, como había hecho Hong Kong, China.

El contenido

7. El Brasil coincidió con Hong Kong, China, en que el párrafo 4 del artículo II de la CITES, que prohíbe el comercio de las especies contenidas en los apéndices I, II y III, constituía una OCE. No obstante, dijo que era importante no perder de vista los artículos III, IV y V, que establecen las circunstancias excepcionales en las cuales puede realizarse de hecho dicho comercio. También mencionó el apartado 2 del artículo 4 b) del Protocolo de Montreal, que autoriza a los países en desarrollo a retrasar la puesta en práctica de un sistema para la concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias controladas enumeradas en los anexos C y E. El Brasil deseaba volver sobre la cuestión de las "disposiciones sobre flexibilidad" más adelante, puesto que creía que formaba parte integrante de las negociaciones con arreglo al apartado i) del párrafo 31.

8. Sobre el documento japonés, el Brasil creía que tan sólo las obligaciones correspondientes a la categoría 1) mencionadas en el documento podían considerarse OCE. Las demás categorías comportaban un grado de discrecionalidad demasiado elevado. Manifestó su acuerdo con la definición de Malasia de los AMUMA y las OCE, pero discrepó con la opinión de que el párrafo 4 del artículo II de la CITES no pudiera considerarse una OCE. En lo referente a las decisiones de las Conferencias de las Partes, el Brasil dijo que sólo las decisiones obligatorias relacionadas con medidas comerciales podían considerarse OCE. Discrepaba con las CE sobre el hecho de que la expresión "establecidas en los AMUMA" abarcara automáticamente las futuras decisiones de las Conferencias de las Partes. Las futuras decisiones deberían examinarse una a una.

9. Los Estados Unidos compartían la opinión del Brasil de que las medidas de la categoría 2) establecida por el Japón no constituían OCE. En cuanto a las decisiones de las Conferencias de las Partes, creían que debían tratarse una a una para determinar hasta qué punto estaban vinculadas con las OCE establecidas en los AMUMA. Cuestionaron la propuesta de las CE de que el carácter jurídicamente vinculante de una decisión de las Conferencias de las Partes fuera el factor determinante principal de que pudiera considerarse "establecida" en un AMUMA. Sobre la cuestión

de la especificidad de una obligación comercial, los Estados Unidos adujeron que bastaba con que una disposición exigiera un resultado relacionado con el comercio (como el apartado b) del artículo 3.2 del Convenio sobre contaminantes orgánicos persistentes). Sin embargo, dijeron que exigir un resultado otorgando discrecionalidad sobre si se alcanzaban mediante restricciones comerciales u otras medidas, como los impuestos internos, no podía considerarse una OCE. Por lo tanto, a diferencia del análisis suizo, los Estados Unidos no consideraban que el artículo 2.1 del Protocolo de Kyoto fuera una OCE. Añadieron que, cuando las disposiciones imponían un resultado directamente relacionado con el comercio, no quedaban abarcadas por el mandato si no eran lo bastante específicas. Así pues, el artículo 16.1 del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología tampoco podía considerarse una OCE.

10. Australia acogió con satisfacción los documentos de los Estados Unidos y la India presentados en la última reunión, señalando que mostraban la complejidad que entraña categorizar las OCE. El documento indio había adoptado un enfoque más estricto sobre la definición de las OCE que el estadounidense. Los Estados Unidos habían incluido las obligaciones establecidas por los AMUMA que debían cumplirse para que pudieran realizarse intercambios comerciales, mientras la India sólo había incluido las obligaciones directamente relacionadas con el comercio real y efectivo. Por ejemplo, los Estados Unidos habían sugerido que el Convenio de Basilea contenía 28 OCE, mientras que para la India sólo contenía siete. El análisis preliminar de Australia sobre los seis AMUMA apuntaba a que el número de OCE se situaba entre los indicados en los documentos de los Estados Unidos y la India. En el Convenio de Basilea, Australia consideraba OCE algunas de las que había excluido la India, como las siguientes: apartado g) del artículo 4.2, apartado a) del artículo 4.7, apartado b) del artículo 4.7, artículo 6.2, artículo 6.8 y artículo 9.2. Por otra parte, Australia excluía algunas de las incluidas por los Estados Unidos, como las siguientes: artículo 3.1, artículo 3.2, apartado f) del artículo 4.2, artículo 4.10, artículo 5.1, artículo 13.2, apartado a) del artículo 13.3 y artículo 13.4. Australia se alegraba del hecho de que la comunicación japonesa se hubiera centrado también en los seis AMUMA identificados por los Estados Unidos, pero observó que el Japón seguía prejuzgando el resultado de las negociaciones. Coincidió con la comunicación de Malasia en que únicamente debían considerarse las OCE contenidas en el texto de los acuerdos, en sus protocolos y en sus anexos. No obstante, cuestionaba el argumento de las CE de que todas las decisiones de las Conferencias de las Partes jurídicamente vinculantes estuvieran abarcadas por el mandato.

11. Chile agradeció a Hong Kong, China, por su comunicación; coincidía con la opinión de que el mandato se limitaba al comercio entre las Partes y de que las medidas más estrictas que las específicamente adoptadas en virtud de un acuerdo ambiental no debían ser consideradas obligaciones comerciales específicas. Entendía que el Japón afirmaba que las medidas que daban discrecionalidad a las partes no entraban en el mandato, pero no le quedaba claro este punto en la segunda categoría de medidas identificadas por el Japón en su documento.

12. El Canadá agradeció a Malasia su comunicación, pero indicó que no deseaba definir los "AMUMA". Lo que había que examinar eran las OCE en relación con las normas de la OMC. Para el Canadá, la comunicación japonesa indicaba que las diferentes OCE tendrían una relación muy diferente con las normas de la OMC. En el párrafo 7 de su comunicación, el Japón excluía las disposiciones que conferían derechos, que no eran OCE por definición. No obstante, el Canadá creía que se trataba de una exclusión prematura. Coincidió con el Japón y la India en que las disposiciones de los AMUMA debían leerse en ocasiones conjuntamente con otras disposiciones, para determinar plenamente si se trataba de OCE. El Canadá afirmaba que, para que se consideraran OCE, las decisiones de las Conferencias de las Partes debían ser vinculantes para las Partes. No se consideraba obligado, con arreglo al derecho internacional, por las decisiones cuyo carácter vinculante no se hubiera especificado explícitamente. En relación con el párrafo 18 del documento de la India, cuya interpretación era que el mandato afectaba sólo a aquellas medidas que eran obligatorias y específicas en su totalidad, el Canadá se preguntaba si la India estaría dispuesta a ampliar esta definición

restrictiva a los casos en que la especificidad y las obligaciones dependieran de "otros factores relacionados". Señaló que, aunque se estaba creando un entendimiento común entre los Miembros en el sentido de que las OCE debían ser específicas, obligatorias y estar relacionadas con el comercio, existían divergencias cuando se trataba de identificar las medidas específicas de los AMUMA (lo cual parecía especialmente cierto en el caso del Convenio de Basilea). Por lo tanto, afirmaba que lo mejor sería abstenerse de enumerar las OCE o incluso los AMUMA. En cambio, instó al CCMA en Sesión Extraordinaria a centrarse en tratar de comprender la naturaleza y variedad de las OCE. Pidió a las secretarías de los AMUMA información sobre el carácter preciso de los instrumentos de las Conferencias de las Partes.

13. Suiza no era partidaria de que se enumeraran las OCE, sino que prefería elaborar criterios que permitieran su identificación de una manera más conceptual. Creía que no era necesario que las OCE estuvieran incluidas en un solo artículo de un acuerdo, sino que podían dimanar de un conjunto de disposiciones de un AMUMA. Esos casos no podían tenerse en cuenta en una mera enumeración de disposiciones. Creía que las OCE también podían figurar en las decisiones de las Conferencias de las Partes, como habían indicado las CE. Igualmente, estaba claro, desde el punto de vista jurídico, que todas las modificaciones de los AMUMA que entraran en vigor podían considerarse OCE. Por lo tanto, el mecanismo que elaborara el CCMA en Sesión Extraordinaria debía tener en cuenta la creación de futuros AMUMA. Si los Miembros se guiaban por una lista, cada vez que se negociara o entrara en vigor una medida nueva habría que adaptar la lista, lo que resultaría un procedimiento laborioso e ineficiente.

14. Suiza creía que las OCE entraban en dos grandes categorías: 1) medidas comerciales establecidas explícitamente por los AMUMA y de carácter obligatorio, y 2) otras medidas apropiadas y necesarias para alcanzar un objetivo establecido por un AMUMA. Al parecer, había consenso entre los Miembros de la OMC en que las OCE de la categoría 1) eran realmente OCE. Con respecto a las de la categoría 2), explicó que algunas medidas comerciales de los AMUMA se habían elaborado para dar discrecionalidad a las Partes sobre las medidas que debían adoptar. La discrecionalidad a menudo era deliberada y se establecía explícitamente en los AMUMA. Era importante garantizar que las normas de la OMC no interfirieran con la autoridad soberana de una Parte para recurrir a esta discrecionalidad. Sin embargo, un Miembro de la OMC debía poder intervenir en el marco de la OMC en caso de que otro Miembro usara indebidamente esta discrecionalidad para imponer el proteccionismo o una discriminación injustificable.

15. Tomando como ejemplo el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, Suiza dijo que muchas delegaciones consideraban que su artículo 3.1 era una OCE. El artículo establecía que las Partes prohibirán y/o adoptarán las medidas jurídicas y administrativas que sean necesarias para eliminar la producción y utilización de los productos químicos enumerados en su anexo y las importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo B. El artículo 3.2 del mismo Convenio no se refería de la misma manera explícita y específica a las OCE, pero daba a las Partes cierto margen en relación con las medidas relacionadas con el comercio que habían de adoptarse. Este artículo entraba en la categoría 2) de la tipología suiza y debía considerarse una OCE.

16. Suiza abordó luego el Convenio de Basilea. Dijo que, mientras el artículo 4.1, que obligaba a las Partes a prohibir las exportaciones de desechos a las Partes que hubieran prohibido su importación, era considerado una OCE por la mayoría de las delegaciones, el artículo 4.7, que instaba a las Partes a garantizar la seguridad en la manipulación durante el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos mediante la adopción de medidas sobre su embalaje, etiquetado y transporte, no cumplía el criterio impuesto por algunos Miembros para considerarlo una OCE. Suiza creía que debía ser considerado una OCE y que entraba en el mandato del apartado i) del párrafo 31.

17. Suiza reiteró su opinión de que la OMC no debía cuestionar la "necesidad" de las medidas comerciales establecidas por los AMUMA. Debía existir la presunción de que cualquier medida que cumpliera las condiciones de una OCE era necesaria para alcanzar los objetivos de un AMUMA. Naturalmente, esta presunción no impediría que los Miembros cuestionaran la manera de aplicar determinada medida, en particular para comprobar si su aplicación suponía una discriminación arbitraria o injustificable o una restricción comercial encubierta. Sin embargo, si esas sospechas no podían demostrarse, la medida debía considerarse compatible con el artículo XX del GATT. Suiza creía que ese enfoque o aclaración no aumentaba ni disminuía los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los Acuerdos vigentes de la OMC, como se afirmaba en el párrafo 32 de la Declaración de Doha. Noruega convino en que una lista definitiva o exhaustiva de las OCE no sería útil y abogó por una identificación de criterios más generales.

18. La Argentina manifestó su acuerdo con la totalidad del documento de Malasia, tanto sobre los AMUMA como sobre las OCE. En cuanto al documento de las CE, dijo que la cuestión de las decisiones de las Conferencias de las Partes debía examinarse muy cuidadosamente y caso por caso. Sobre el documento japonés, creía que el Japón había incluido en su anexo, en la categoría 1), medidas que no encajaban en su propia caracterización de esa categoría. Había incluido medidas que daban cierto grado de discrecionalidad, pese a que, con arreglo a su propia definición de las categorías 1) y 2), las medidas discrecionales quedaban excluidas. Por ejemplo, el Japón consideraba que el apartado 4 del artículo II de la CITES entraba en la categoría 1). Sin embargo, ese artículo establecía simplemente que las Partes no debían permitir el comercio en especímenes de especies incluidas en los apéndices I, II y III, excepto de acuerdo con las disposiciones de esa Convención. Dado que el comercio en esos especímenes podía ser prohibido mediante diversas medidas, por ejemplo de tipo administrativo o ambiental, o mediante sanciones penales, ninguna de las cuales estaba especificada en ese artículo, no podía considerarse una OCE. Por otra parte, en relación con el apartado 2 del artículo IV de la CITES, que establecía que "la exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el apéndice II requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos [...]", la Argentina podía convenir con el Japón en que constituía una OCE, pues identificaba la medida específica que debía adoptarse.

19. La Argentina no podía estar de acuerdo en que las medidas de la categoría 2) propuestas por el Japón constituían OCE. El Japón proponía cierta presunción de conformidad para estas medidas. La Argentina creía que esta defensa de la presunción por parte del Japón, así como el llamamiento de Suiza a que se instaurara un "mecanismo" de algún tipo, no entraban en el mandato. No estaba de acuerdo con Suiza sobre el hecho de que el mecanismo propuesto no alteraría los derechos y obligaciones, puesto que invertiría la carga de la prueba establecida en el artículo XX del GATT. El Brasil y Australia convinieron en que la propuesta suiza de invertir la carga de la prueba constituía un cambio fundamental en el equilibrio de derechos y obligaciones y no era un mero cambio de procedimiento.

20. Los Estados Unidos, el Brasil y Australia comentaron la intervención suiza. Dijeron que un enfoque conceptual, consistente en la determinación de criterios, habría sido oportuno si el CCMA en Sesión Extraordinaria hubiera estado inmerso en un proceso de elaboración de un mecanismo para llegar a una solución. Sin embargo, indicaron que una gran mayoría de las delegaciones ya había rechazado este enfoque en debates anteriores. La mayoría había expresado su escepticismo sobre el hecho de que hubiera un conflicto inherente entre las OCE de los AMUMA y las normas de la OMC, y que requiriera una aclaración jurídica del tipo propuesto por Suiza. Esas delegaciones habían insistido en un enfoque por etapas y analítico, que incrementara la comprensión de la cobertura del mandato y que brindara una oportunidad a los interesados de defender que había preocupaciones reales y no solamente hipotéticas. Los Estados Unidos aclararon que no trataban de elaborar una lista definitiva de las OCE y que tampoco buscaban un consenso sobre una lista en particular. En lugar de ello, les interesaba aprender de las experiencias ajenas respecto de la negociación y aplicación de

las OCE en los AMUMA. La experiencia de los Estados Unidos había sido positiva, en particular en relación con la coordinación entre los funcionarios encargados del comercio y del medio ambiente.

21. Filipinas instó al CCMA en Sesión Extraordinaria a que aplicara un enfoque pragmático, en lugar de elaborar criterios o un mecanismo que diera cabida a las OCE. Filipinas acogía con agrado los documentos malasio y japonés, pero le preocupaba la clasificación japonesa de las OCE. Se preguntaba de dónde procedían las dos condiciones que el Japón imponía a las medidas de la categoría 2), puesto que las consideraba arbitrarias, y creía que resultaría prematuro trabajar en función de esta categorización.

22. México acogía con satisfacción los documentos de Hong Kong, China, y Malasia. Consideraba que únicamente las medidas de la categoría 1) del documento japonés eran OCE, y creía que el documento prejuzgaba el resultado de las negociaciones. Abogaba por que el CCMA en Sesión Extraordinaria concediera prioridad a las medidas incluidas en el texto de los propios AMUMA, y no en las decisiones de las Conferencias de las Partes, como habían sugerido las CE. Discrepaba con Suiza sobre el hecho de que su propuesta no cambiaría el equilibrio entre derechos y obligaciones. México señaló que una "lista de OCE" podía ser una herramienta útil de progreso en las conversaciones, pero no tenía por qué ser ni cerrada ni completa.

23. Suiza aclaró su intervención diciendo que establecía una distinción entre el encabezamiento del artículo XX y sus apartados. La presunción de conformidad que Suiza proponía sólo estaba relacionada con los apartados. Si los AMUMA negociaban medidas comerciales, era obvio que las consideraban "necesarias" o "relacionadas" con el cumplimiento de sus objetivos. Por consiguiente, Suiza abogaba por una presunción de conformidad con los apartados del artículo XX. Sin embargo, Suiza no proponía cambios en el encabezamiento. Las medidas que constituyeran discriminaciones arbitrarias o injustificables seguirían siendo objeto del mecanismo de solución de diferencias. Aclaró que, aunque el CCMA en Sesión Extraordinaria no debía elaborar un mecanismo, debía dar una respuesta de algún tipo al mandato relativo a la relación entre la OMC y los AMUMA. El CCMA en Sesión Extraordinaria no estaba negociando simplemente para intercambiar experiencias sobre aplicación. Dijo que, aunque muchas delegaciones habían afirmado que no les parecía problemático, podían surgir problemas en la negociación de nuevos AMUMA. Sobre la observación de la India acerca del derecho continental frente al *common law*, Suiza dijo que prefería que fueran los Miembros los que decidieran qué relación debía haber entre la OMC y los AMUMA, en lugar de dejar que el asunto se resolviera mediante el mecanismo de solución de diferencias. Se trataba del enfoque basado en el derecho continental y en cualquier caso las negociaciones ya se habían acordado en Doha. Acogía con satisfacción la aclaración de los Estados Unidos de que no deseaban una lista exhaustiva de las OCE y creía que las medidas discrecionales debían ser objeto de nuevas discusiones. La Argentina replicó que la distinción realizada por Suiza no modificaba su opinión de que una inversión de la carga de la prueba alteraría los derechos y obligaciones. Remitió a los Miembros al documento WT/CTE/W/203 sobre la jurisprudencia dimanante del artículo XX, que demostraba cómo se había aplicado la carga de la prueba. Reiteró que no veía dónde figuraba en el mandato el llamamiento a la concepción de un "mecanismo" y solicitó una aclaración del alcance del párrafo 8 del documento suizo.

24. Chile explicó que, a su modo de ver, la posición suiza establecía una distinción entre una presunción a reserva de impugnación para las OCE y una presunción a reserva de impugnación para las demás medidas comerciales. Con respecto a las primeras, Suiza proponía una inversión de la carga de la prueba. Sin embargo, con respecto a las segundas, era obvio que no entraban en el ámbito de aplicación del mandato. Sobre la presunción a reserva de impugnación para las OCE, la posición de Suiza estaba justificada, ya que carecería de lógica que un país pusiera en entredicho la necesidad de una medida sobre la cual estaba de acuerdo en otros foros. No obstante, el debate prejuzgaba el resultado de las negociaciones. Los Estados Unidos indicaron que no creían que una aclaración por

Suiza de su propuesta constituyera una prioridad por el momento, ya que la propuesta era prematura y el CCMA en Sesión Extraordinaria no debía desviarse de su senda.

25. Nueva Zelanda acogió con satisfacción la Matriz de la Secretaría, pero indicó que le parecía alarmante el número total de acuerdos enumerados en su anexo (28). No creía que hubiera que tener en cuenta todos esos acuerdos, como por ejemplo el Acuerdo sobre los osos polares. Sobre el documento de las CE, creía que las decisiones de las Conferencias de las Partes debían examinarse una a una. Aunque podía aceptar la presunción de que las decisiones de las Conferencias de las Partes vinculantes jurídicamente estaban "establecidas en los AMUMA", creía que aun así esas decisiones habían de cumplir los criterios que los Miembros hubieran fijado para las OCE. Dicho de otro modo, debían 1) ser específicas, 2) estar relacionadas con el comercio, y 3) ser obligatorias. En cuanto al documento japonés, Nueva Zelanda afirmó que daba un salto lógico, al pasar de utilizar la "discrecionalidad" para definir una OCE, a utilizarla como factor para evaluar la compatibilidad de las obligaciones de los AMUMA con las normas de la OMC. La discrecionalidad no era un criterio utilizado en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. A Nueva Zelanda le sorprendía que algunas disposiciones sobre comercio que consideraba OCE no aparecieran en el cuadro correspondiente a la categoría 1) del documento japonés. Acogía con satisfacción las definiciones de los AMUMA y las OCE dadas en el documento malasio, que eran estrictas y restrictivas, y su aplicación a los tres acuerdos específicos en el anexo a dicho documento. También saludaba el enfoque pragmático del documento de Hong Kong, China.

26. Indonesia creía que los AMUMA eran acuerdos negociados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, suscritos por numerosas Partes y abiertos a todos los países que compartieran sus objetivos ambientales. Afirmó que las negociaciones únicamente debían abarcar los AMUMA que ya hubieran entrado en vigor. Respalda la opinión de Malasia sobre la que constituía un AMUMA. En cuanto al documento japonés, aunque Indonesia estaba de acuerdo en que las categorías 3) y 4) no entraban en el mandato de Doha, discrepaba con la propuesta de que se examinaran una a una. Tampoco estaba de acuerdo con que las medidas de la categoría 2), aunque cumplieran los dos requisitos establecidos por el Japón, pudieran considerarse OCE. Los requisitos eran subjetivos. Además, Indonesia no creía que pudiera presumirse una compatibilidad automática de las medidas de la categoría 1) con las normas de la OMC. Indonesia estaba de acuerdo con la valoración de Malasia y la India sobre lo que constituía un AMUMA. Creía que los artículos II, III.2, III.3, III.4, IV.2, IV.3 a IV.6, V.2 a V.4, VI, VIII y XIV de la CITES; los artículos 4A y 4B del Protocolo de Montreal; y los artículos 4.1 a), 4.1 b), 4.1 c), 4.2 e), 4.2 g), 4.5, 4.8, 4.9 a) a c), 6.1 a 6.4, 8, 9.2 y 11 del Convenio de Basilea, constituían OCE. Indonesia consideraba alentador que hubiera semejanzas en las disposiciones sobre comercio identificadas por los Miembros como OCE en los tres AMUMA en cuestión, lo que se debía a la precisión y claridad de algunas disposiciones de los AMUMA. También parecía haber un amplio consenso entre los Miembros de la OMC sobre el hecho de que los tres acuerdos referidos eran AMUMA, e Indonesia instó al CCMA en Sesión Extraordinaria a comprobar qué era lo que en esos acuerdos hacía que se consideraran AMUMA a efectos de las negociaciones, puesto que ello podía ayudar a identificar otros acuerdos que debieran examinarse. En cuanto al documento de las CE, Indonesia dudaba que fuera necesario examinar las decisiones de las Conferencias de las Partes en el contexto de las presentes negociaciones. Esas decisiones evolucionaban con el tiempo, lo que complicaba su examen. Indonesia proponía un enfoque gradual que comenzara con la identificación de las OCE en los propios AMUMA.

27. Kuwait llamó a la atención de los Miembros la página 78 del documento TN/TE/S/5, donde se indicaba que "no se han comunicado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC] efectos negativos en el comercio debidos a medidas y políticas adoptadas por las Partes". Indicó que se trataba de una frase engañosa, ya que sí se estaban produciendo de hecho repercusiones negativas, pero no se había instaurado ningún mecanismo de notificación para que las Partes las comunicaran. Y ello a pesar de que una decisión de las Conferencias de las Partes de la CMNUCC establecía que las Partes debían comunicar las

repercusiones negativas. Citó dos estudios, uno del Organismo Internacional de Energía (OIE) y otro del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), que demostraban la existencia de efectos perjudiciales.

28. Kuwait explicó que la CMNUCC no trataba cuestiones puramente ambientales; también se adentraba en los ámbitos socioeconómico, técnico, científico y ético. En el Anexo 1 al Protocolo de Kyoto se da a las Partes flexibilidad para cumplir sus compromisos con arreglo al mismo, puesto que establece un mecanismo para un desarrollo limpio, para la aplicación conjunta y otras herramientas. La Convención Marco no era más que un "marco" y no llegaba a establecer las obligaciones específicas de las Partes. Los derechos y obligaciones debían determinarse por conducto de las decisiones de las Conferencias de las Partes. Kuwait creía que la cuestión de la especificidad debía examinarse al margen de las medidas concretas. Mientras las OCE debían ser claras y precisas, cuando un acuerdo establecía varias formas alternativas de aplicar sus disposiciones, estas alternativas podían considerarse específicas. Los gravámenes por cambio climático, los impuestos ambientales y los impuestos sobre las emisiones de carbono eran medidas "específicas". Los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) imponían numerosos impuestos de este tipo a los consumidores que, según el Director Ejecutivo de British Petroleum, no limpiaban el medio ambiente, sino los bolsillos de las personas. Kuwait explicó que una medida comercial era "cualquier medida que modificase las condiciones de flujo del comercio o de competencia entre productos sustituibles". Añadió que consideraba que también eran OCE todas las decisiones, resoluciones o modificaciones obligatorias de las Conferencias de las Partes. La Arabia Saudita compartía las opiniones expresadas por Kuwait. Preguntó al invitado *ad hoc* de la CMNUCC si las cuestiones relacionadas con el comercio, como el acceso a los mercados, se consideraban parte del mandato de la CMNUCC. Se preguntaba si la CMNUCC consideraba que esas medidas eran OCE.

29. Tailandia creía que las OCE tenían que ser medidas comerciales explícitas que eran obligatorias en los AMUMA (como afirmaban el Japón; Hong Kong, China; y Malasia). Convino con Hong Kong, China, en que debía tratarse de medidas que afectaran al libre movimiento de mercancías, y con Malasia en que las OCE contenidas en los anexos, protocolos y modificaciones ratificados por las Partes entraban en el ámbito de aplicación del mandato del apartado i) del párrafo 31. Sin embargo, Tailandia no estaba convencida de la conveniencia de incluir por el momento las decisiones de las Conferencias de las Partes en el debate. Instaba al CCMA en Sesión Extraordinaria a centrarse en las OCE contenidas en los propios AMUMA en esta fase de los debates. Coincidió con la prioridad general atribuida en el documento malasio al concepto de los AMUMA. Tailandia no estaba de acuerdo en que las medidas de la categoría 2) del documento japonés fueran OCE, pero sí coincidía con el Japón en que las categorías 3) y 4) estaban excluidas.

30. El Pakistán acogió con satisfacción el enfoque adoptado en el documento de Hong Kong, China, pero pidió explicaciones sobre la referencia al ajuste de algunas disposiciones de los AMUMA con las normas de la OMC. Se preguntó si así se ampliaría el mandato del apartado i) del párrafo 31. El Pakistán creía que una OCE era una medida específica y obligatoria en su totalidad y obligaba a una Parte a adoptar, o abstenerse de adoptar, una iniciativa relacionada con el comercio. El Pakistán suscribía plenamente los ejemplos dados en el documento indio, en los apartados ii), iii) y iv) del párrafo 8, que aludían a las medidas que no constituían OCE. Coincidió con el documento malasio sobre lo que constituía un AMUMA. En cuanto al documento japonés, se asoció a los comentarios del Brasil y los Estados Unidos. No estaba de acuerdo con que las medidas de la categoría 2) constituyeran OCE.

31. Polonia manifestó su acuerdo con las CE en que el análisis del CCMA en Sesión Extraordinaria no debía limitarse a los AMUMA, sino hacerse extensivo al conjunto del marco operacional de esos acuerdos, incluidas las decisiones de las Conferencias de las Partes.

32. Corea expresó su preocupación por la declaración del documento japonés de que las OCE de la categoría 1) podían ser compatibles con las normas de la OMC. Esas declaraciones eran prematuras. También cuestionaba los requisitos que el Japón había establecido para la compatibilidad de la categoría 2). Con respecto a las decisiones de las Conferencias de las Partes, Corea creía que debían examinarse una a una. En el párrafo 14 del documento japonés, el Japón había distinguido entre dos categorías de decisiones de las Conferencias de las Partes, pero Corea no comprendía el fundamento de esa distinción.

33. Las Comunidades Europeas pidieron una aclaración a los invitados con carácter *ad hoc* sobre la terminología de los AMUMA en relación con los instrumentos de las Conferencias de las Partes. Mientras que en algunos acuerdos se utilizaba la palabra "recomendación" con el sentido de "decisión", en otros se empleaba la palabra "decisión" para referirse a "recomendaciones" y en ocasiones a recomendaciones no vinculantes. También pidieron a esos invitados que formularan observaciones sobre el tratamiento de las decisiones de las Conferencias de las Partes en el documento de las CE y sobre la exactitud fáctica de los debates del CCMA en Sesión Extraordinaria en el marco del apartado i) del párrafo 31.

34. Las CE acogían con interés la distinción establecida en el documento japonés entre medidas comerciales explícitas y la "*obligation de résultat*", una distinción que hacían también las CE. Sin embargo, dijeron que debían reflexionar más a fondo sobre las condiciones que el Japón había establecido para la última categoría. Las CE acogían también con interés el concepto del grado de discrecionalidad expuesto en el documento, así como la referencia al Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología, y las prescripciones en materia de manipulación y embalaje. El documento introducía un nuevo elemento que debía tenerse en cuenta en los debates, el de la "referencia a otros instrumentos internacionales" en los AMUMA (aludiendo al artículo 4.7 b) del Convenio de Basilea). En el párrafo 11 se ampliaba también el alcance de las "OCE", al incluir las notificaciones, los reglamentos técnicos y las prescripciones en materia de embalaje y etiquetado. El documento iniciaba también un importante debate sobre las decisiones de las Conferencias de las Partes. En cuanto al documento de Hong Kong, China, las CE acogían con satisfacción la extracción de conclusiones conceptuales sobre la base de su experiencia en la ejecución de los AMUMA y el llamamiento realizado en el documento a evitar una "solución válida para todos". Las CE saludaron los esfuerzos hechos en el documento malasio por definir los AMUMA, así como la posibilidad que habría de examinar ciertos tipos de decisiones de las Conferencias de las Partes, como los protocolos y las modificaciones que habían sido ratificados. Pidió que la intervención suiza se distribuyera por escrito.

35. En respuesta a las observaciones formuladas sobre el documento de las CE, las Comunidades Europeas indicaron que, al proponer que se tuviera en cuenta la naturaleza "jurídicamente vinculante" de las Conferencias de las Partes, no sugerían que se omitieran otros factores. De hecho, en el documento de las CE se afirmaba que las decisiones jurídicamente vinculantes de las Conferencias de las Partes sólo eran OCE "si contienen obligaciones que correspondan a la definición de una OCE, y en la medida en que así sea".

36. El Perú no creía que hubiera que tratar cuestiones conceptuales, puesto que no había ningún conflicto entre los AMUMA y las normas de la OMC. De hecho, afirmaba que una interpretación o aclaración podría provocar un conflicto de competencias entre la OMC y los AMUMA. En relación con el documento japonés, compartía la opinión de que sólo se podían entender como obligaciones comerciales específicas aquellas contenidas en la categoría 1). Las otras categorías eran demasiado subjetivas. Creía que las OCE habían de ser específicas y obligatorias y estar relacionadas con el comercio. Coincidió con Hong Kong, China, en que el artículo II.4 de la CITES constituía una OCE, puesto que abogaba por una prohibición del comercio, y de manera general acogía con satisfacción las comunicaciones de Hong Kong, China, y Malasia. Expresó su preocupación acerca de la propuesta de

las CE de que las decisiones adoptadas por las Conferencias de las Partes se incluyeran automáticamente en la categoría de obligación comercial específica.

37. Egipto preguntó si Hong Kong, China, afirmaba que algunas disposiciones de la CITES (los artículos II, III, IV, V y VI) eran incompatibles con el artículo XX del GATT y el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. Añadió que, en su opinión, los AMUMA no entorpecían el libre movimiento de las mercancías, sino que lo regulaban. Aunque Egipto creía que era prematuro debatir las decisiones de las Conferencias de las Partes, convenía con las CE en que las modificaciones y los anexos a los tratados podían considerarse OCE. Se mostró de acuerdo con las medidas identificadas en la categoría 1) del documento japonés, pero no con las demás.

38. La India creía que varias medidas comerciales de los AMUMA debían leerse conjuntamente y abordó el debate sobre las OCE desde ese punto de vista. Sin embargo, eso no implicaba que si una medida debía considerarse OCE, el resto de las medidas debieran considerarse igualmente OCE. Creía en una lectura literal del mandato y apoyaba la comunicación Malasia y las intervenciones de Indonesia y el Pakistán. Convenía con Malasia en que los AMUMA negociados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en los que participaran casi todos los países y que reflejaran la diversidad de los Miembros de las Naciones Unidas y la OMC en términos de difusión geográfica y fases de desarrollo económico y social, debían examinarse con arreglo al apartado i) del párrafo 31. También estaba de acuerdo en que las medidas comerciales que eran obligatorias y específicas podían considerarse OCE. Acogía con satisfacción la comunicación de las experiencias sobre aplicación llevada a cabo por Hong Kong, China. La India se mostró de acuerdo con el Japón en lo referente a las medidas de la categoría 1), pero no en lo referente a las demás categorías, puesto que la discrecionalidad era contraria a la especificidad. Creía que el resultado de las negociaciones debía basarse en el intercambio de experiencias sobre aplicación.

39. Hong Kong, China, replicó a la afirmación del Pakistán de que en el documento de Hong Kong, China, se rebasaba el mandato. Explicó que se refería a las disposiciones de los AMUMA relacionadas con el comercio, pero que no lo "entorpecían" ni "regulaban". En opinión de Hong Kong, China, estas medidas no debían examinarse más a fondo, ya que ni siquiera se plantearía la cuestión de su compatibilidad con la OMC (que preocupaba al Pakistán). Sobre la CITES, aclaró que Hong Kong, China, había afirmado simplemente que los artículos II, III, IV, V y VI podían contener OCE. No trataba de prejuzgar el resultado de las negociaciones, ni defendía la compatibilidad de estas medidas con la OMC. En respuesta al comentario de las CE sobre las conclusiones de Hong Kong, China, aclaró que, aunque el artículo IV de la CITES sólo imponía la presentación previa de un permiso de exportación o un certificado de reexportación para los especímenes de especies amenazadas incluidas en el Apéndice II, Hong Kong, China, había instaurado permisos de importación no impuestos específicamente por la CITES, para reforzar el control de las importaciones. Si bien el procedimiento de Hong Kong, China, era directo, era posible que otros Miembros aplicaran medidas más gravosas o arbitrarias al amparo del artículo XIV. Dado que este artículo establecía un margen de discrecionalidad, no creía que se tratara de una OCE incluida en el mandato.

40. Malasia explicó al Brasil que su análisis se basaba en que una medida fuera o no obligatoria y en que contuviera o no una prescripción comercial específica (como explicaba en el cuadro de su comunicación). Si cumplía ambas condiciones, la medida se consideraba una OCE. De acuerdo con este criterio, Malasia había determinado que el artículo II.4 de la CITES era una OCE. Añadió que, aunque algunas delegaciones no creían que fuera importante definir los AMUMA, esa definición era necesaria para que los Miembros no excedieran a los términos del mandato. Malasia creía que las posiciones de los Miembros sobre las OCE diferían, pues algunos eran partidarios de una interpretación amplia y otros de una más restrictiva. Sería necesario un mayor trabajo analítico. Aunque Malasia no excluía la elaboración de una lista exhaustiva, pidió que las disposiciones de

las OCE se examinaran más extensamente. En respuesta a las CE, recalcó que en su opinión sólo entraban en el mandato las modificaciones, los anexos y los protocolos adoptados y ratificados por un amplio número de partes en un AMUMA. Malasia no estaba segura de por qué las CE habían incluido las decisiones de las Conferencias de las Partes de índole interpretativa. Aunque podían ser necesarias para interpretar las OCE, en sí mismas no eran OCE. En cuanto al documento japonés, sólo estaba de acuerdo en lo referente a las medidas de la categoría 1). Malasia tampoco estaba segura de por qué las medidas consideradas OCE habían de ser automáticamente compatibles con las normas de la OMC, ni comprendía la lógica del "mecanismo" suizo. Se oponía a que se prejuzgara el resultado de las negociaciones. Malasia acogía con satisfacción la comunicación de Hong Kong, China, y compartía su modo de analizar las OCE, excepto en lo referente al artículo II.4 de la CITES. No obstante, Hong Kong, China, había realizado una observación interesante, en el sentido de que podían adoptarse medidas nacionales suplementarias de conformidad con determinadas disposiciones, y que podían ser discrecionales y no constituir OCE. Por lo tanto, coincidía en que el artículo IV de la CITES no era una OCE.

41. Las Comunidades Europeas aclararon a Malasia por qué habían hablado de decisiones interpretativas de las Conferencias de las Partes frente a las modificaciones que tuvieran la misma condición jurídica. Explicaron que a menudo era necesario tener en cuenta las decisiones interpretativas para comprender la naturaleza de la relación entre la OCE de un AMUMA y las normas de la OMC. Era posible que estas decisiones no fueran OCE por sí mismas, pero que hubiera que tenerlas en cuenta. En respuesta a la observación de Hong Kong, China, sobre el artículo XIV de la CITES, las CE creían que los Miembros debían decidir el margen de discrecionalidad que estaban dispuestos a aceptar en las medidas que podían considerarse OCE y afirmó que un debate conceptual, con el respaldo de ejemplos, era el camino a seguir. Con respecto al intercambio de opiniones entre Suiza y la Argentina, las CE señalaron que habían realizado observaciones similares sobre la comunicación de Suiza en los párrafos 28 y 29 de su primera comunicación. Habían afirmado que podía defenderse que algunas medidas comerciales de los AMUMA eran legítimas desde el punto de vista de las normas de la OMC. Aunque con ello se planteaba la cuestión de la carga de la prueba, deseaban señalar que, con arreglo a las normas de la OMC, no era evidente que quienes invocaban disposiciones sobre excepciones tuvieran la carga probatoria. Remitieron a los Miembros a la "presunción de conformidad" del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio para el uso de las normas internacionales. Quienes se amparaban en esa presunción debían demostrar pese a todo que cumplían el resto de los elementos del Acuerdo.

42. El Japón respondió a la aparente contradicción entre los conceptos de especificidad y grado de discrecionalidad. Creía que algunas disposiciones de los AMUMA, que daban a las Partes un grado de discrecionalidad para el cumplimiento de sus obligaciones, debían leerse en combinación con otras medidas para imponer la especificidad. Por ejemplo, el apartado e) del artículo 4.2 del Convenio de Basilea, que instaba a las Partes a adoptar las medidas apropiadas, podía dar la impresión de que era discrecional. Sin embargo, la parte siguiente del artículo establecía con claridad el resultado que debía alcanzarse mediante la medida, de modo que conjuntamente podían considerarse una OCE. Los Estados Unidos y la India también habían considerado este artículo una OCE. Después se refirió al salto lógico de la discrecionalidad a la compatibilidad con la OMC apuntado por Nueva Zelanda y afirmó que lo que había querido hacer era tratar en primer lugar la discrecionalidad en relación con la especificidad y luego volver a la cuestión de la compatibilidad con la OMC. En relación con el argumento de la "subjetividad" expuesto por algunas delegaciones sobre las condiciones establecidas para las medidas de la categoría 2), el Japón explicó que había tratado de ser lo más objetivo posible. Las condiciones se habían fundamentado en el análisis por el Japón de la jurisprudencia de la OMC, como el asunto Camarones/Tortugas.

43. En relación con las observaciones de la Argentina sobre el hecho de que los artículos II.4 y IV de la CITES no constituían OCE, dijo que cualquier medida que afectara al libre movimiento de las mercancías debía considerarse una OCE. El enfoque argentino era demasiado restrictivo, puesto que

incluso los Estados Unidos y la India habían considerado que esos artículos eran OCE. Sobre la pregunta coreana de por qué el Japón daba ejemplos en el párrafo 14.1 de su documento, pero no en el 14.2, explicó que se debía a que creía que las medidas mencionadas en el párrafo 14.2 no eran OCE. El Japón acogía con satisfacción la comunicación de las CE y creía que era necesario un debate más a fondo sobre la segunda categoría de decisiones de las Conferencias de las Partes. También acogía con satisfacción la comunicación de Hong Kong, China, pero creía que los Miembros no debían examinar con demasiada precipitación las medidas nacionales. El intercambio de experiencias nacionales era útil, pero el mandato estaba relacionado con las normas de la OMC y las OCE. El Japón añadió que consideraba demasiado restrictivo el párrafo 17 del documento de Malasia.

44. La CITES agradeció al CCMA en Sesión Extraordinaria su invitación y expresó su deseo de que se tratara del inicio de una cooperación fructífera entre la CITES y el Comité. Explicó que había colaborado estrechamente con la Secretaría de la OMC en la Matriz y estaba dispuesta a seguir cooperando con la OMC, el PNUMA y otros AMUMA. La CITES esperaba formar parte ahora de este proceso en pie de igualdad. Era el Comité el que debía decidir si una medida era o no una OCE, y la CITES señaló que no interferiría en ese debate. No obstante, dijo que, durante los tres últimos decenios, la CITES había demostrado ser un instrumento de reglamentación del comercio internacional de la fauna y la flora silvestres muy necesario y eficaz y de una importancia capital para la conservación de las especies en todo el mundo. Prohibía el comercio de más de 800 especies animales y de unas 250 especies vegetales, y regulaba el comercio de 4.000 especies animales y 25.000 especies vegetales no amenazadas. La CITES era una convención efectivamente aplicable gracias a los instrumentos que tenía a su disposición. Quizás el CCMA en Sesión Extraordinaria decidiera que algunos de esos instrumentos eran OCE pero, sin esas obligaciones, la Convención habría carecido de utilidad. En el caso de la CITES, era importante señalar que muchas disposiciones y medidas no figuraban como tales en su texto, pero habían sido establecidas por las Conferencias de las Partes (mencionada en la página 49 de la Matriz). Disponía de medidas comerciales establecidas por las Conferencias de las Partes; de medidas comerciales establecidas por su Comité permanente, en nombre de las Conferencias de las Partes; de medidas comerciales recomendadas por comités científicos sobre animales y plantas y adoptadas por el Comité permanente; y de medidas comerciales recomendadas por la secretaría a las Conferencias de las Partes y al Comité permanente. Por lo tanto, podía encontrarse toda una serie de medidas comerciales basadas en el texto de la Convención, aunque no se apreciaran necesariamente de inmediato.

45. Algunos ejemplos de estas medidas se reflejaban en el proyecto de legislación de la CITES. La CITES había analizado la legislación de todas sus Partes y les había dado un plazo para mejorarla. En caso de incumplimiento, la Secretaría recomendaría al Comité permanente que prohibiera o suspendiera el comercio de las especies abarcadas por la Convención con la Parte en cuestión. Esta medida se fundamentaba en el artículo VIII de la Convención. En el artículo IV.3 de esa Convención, se establecía que los países debían garantizar que sus exportaciones de fauna y flora silvestres se realizaban de una manera sostenible, pero cuando los comités de animales o plantas comprobaran que un país no aplicaba dicho artículo, podía proponer a dicho país que adoptara una limitación de las exportaciones, un sistema de contingentes o una prohibición total de ese comercio, y la Secretaría debía aplicar esa decisión o recomendación junto con el país. Si el país no cumplía adecuadamente estas medidas, el Comité permanente podía volver a decidir una suspensión del comercio. Cuando surgían problemas de observancia y la Secretaría o una Parte descubrían que un país participaba activamente en casos graves de comercio ilegal, trataba de resolverlo con la Parte en cuestión y, si no era posible, el Comité permanente o las Conferencias de las Partes podían decidir de nuevo suspender el comercio con el país de que se trataba.

46. En el documento de las CE se mencionaban estas medidas de las Conferencias de las Partes, pero sobre todo las recomendaciones no vinculantes. Sin embargo, había otras decisiones de las Conferencias de las Partes sobre los niveles de los contingentes de exportación y otras condiciones en

las cuales podían comerciar las Partes, que comportaban medidas de inscripción de los comerciantes en la secretaría de la CITES o a través de las Conferencias de las Partes, y medidas que únicamente autorizaban el comercio si los productos objeto de intercambio estaban marcados o etiquetados. La CITES añadió que las decisiones de su Conferencia de las Partes no se adoptaban por consenso y, en muchos casos, se adoptaban por mayoría de dos tercios. Con arreglo a este sistema democrático, era imposible que las Partes acordaran las medidas por adoptar, pero el representante no dudaba de que las medidas se decidían de manera multilateral, se basaban en criterios científicos de aceptación general adoptados por las Conferencias de las Partes y se adaptaban regularmente al cambio en los descubrimientos científicos. Como consecuencia de ello, no se habían producido litigios reales entre Partes ni entre una Parte y las otras 161 Partes en la CITES en sus 30 años de existencia.

47. La CITES también comentó la cuestión del nivel de discrecionalidad. El artículo II.4 establecía claramente que las Partes no debían aceptar el comercio que no se ajustara a la Convención, en cuyo artículo VIII figuraba una lista no exhaustiva de los instrumentos jurídicos para lograrlo. Debido a que había muchas formas de alcanzar las mismas metas se había establecido cierto nivel de discrecionalidad. Sin embargo, el proyecto de legislación mostraba que la lista de comprobación de las medidas que debían adoptarse y sobre las cuales las Partes debían rendir cuentas ante las Conferencias de las Partes era bastante estricta y el nivel de discrecionalidad, reducido.

48. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) expresó también su agradecimiento por esta invitación, en línea con las decisiones de las Conferencias de las Partes del CDB sobre la necesidad de cooperación con la OMC. El CDB participaba en la presente reunión con miras a contribuir al objetivo global de un apoyo mutuo entre los acuerdos sobre comercio y sobre medio ambiente, sobre el que habían hecho hincapié tanto las Conferencias de las Partes en el CDB como la Declaración Ministerial de Doha. Dado que la mayoría de los Miembros del CCMA consideraban que el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología contenía OCE, el CDB facilitaba información actualizada sobre dicho Protocolo. Comunicó a los Miembros que el Protocolo había sido ratificado por 47 países y una organización de integración regional. Así pues, sólo eran necesarias tres ratificaciones más para alcanzar la quincuagésima, a partir de la cual comenzaría a correr el plazo de 90 días para la entrada en vigor del Protocolo. Dado el ritmo actual de las negociaciones, se esperaba que la quincuagésima ratificación se depositara en las próximas semanas y que, como resultado de ello, el Protocolo entrara en vigor en torno a agosto o septiembre del año en curso. Por lo tanto, era más que probable que el Protocolo de Cartagena estuviera en vigor cuando se celebrara la Conferencia Ministerial de Cancún y, en ese momento, el procedimiento aplicable a la transferencia de organismos vivos modificados consagrado en el Protocolo sería vinculante jurídicamente para aquellos países que lo hubieran ratificado. La fecha prevista de entrada en vigor significaba que la primera reunión de las Partes en el Protocolo se celebraría consecutivamente a la séptima reunión de las Conferencias de las Partes en el CDB, que debía celebrarse en Malasia en abril o mayo del año próximo. Las Partes en el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología aprovecharían la ocasión para examinar diversas cuestiones relacionadas con su aplicación, en particular los requisitos de identificación de los organismos vivos modificados destinados a su uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento; las cuestiones relacionadas con la supervisión y la presentación de informes del Protocolo; y las cuestiones relativas a la observancia, la responsabilidad y la reparación.

49. En cuanto a las decisiones de las Conferencias de las Partes, el CDB hizo varias observaciones sin perjuicio del resultado de los debates del CCMA en Sesión Extraordinaria. Las decisiones de las Conferencias de las Partes variaban considerablemente en cuanto a contenido y finalidad. Por este motivo probablemente no se pudiera extraer una conclusión general sobre su condición jurídica. Debían examinarse una a una. Como indicaban las CE en su documento, algunas decisiones de las Conferencias de las Partes eran de índole política y, como tales, no eran vinculantes jurídicamente. Otras decisiones estaban relacionadas con el funcionamiento de las instituciones del Convenio y con el presupuesto. Sin embargo, muchas de las decisiones de las Conferencias de las

Partes, la mayoría, de hecho, según la experiencia del CDB, estaban relacionadas con la aplicación de las disposiciones sustantivas del acuerdo y, por lo tanto, eran complementarias a estas disposiciones. Podían determinar cómo se esperaba que las Partes cumplieran sus obligaciones y cómo debían funcionar los mecanismos institucionales del Convenio. En el caso del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, cuando el Protocolo entrara en vigor en los meses venideros, la reunión de las Partes debería adoptar decisiones importantes sobre su funcionamiento, tal como establecían las disposiciones del Protocolo. Entre ellas figuraban la adopción de mecanismos institucionales para fomentar la observancia y para resolver los casos de incumplimiento, el formato y los plazos para la presentación de los informes por las Partes, así como los requisitos de identificación de los organismos vivos modificados destinados a su uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento. Naturalmente, se trataba de cuestiones clave relacionadas con el funcionamiento del Protocolo de Cartagena y con el modo en el que las Partes debían cumplir las obligaciones dimanantes de él. Como tales, esas decisiones estaban íntimamente relacionadas con el funcionamiento de disposiciones clave del Protocolo.

50. La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) expresó también su agradecimiento por la invitación. Señaló que los criterios para conceder la condición de observador a los AMUMA en estas reuniones se centraban en el apartado i) del párrafo 31 de la Declaración Ministerial de Doha, ya que la concesión de esa condición con arreglo al apartado ii) del párrafo 31 seguía siendo objeto de examen. Era consciente de que el proceso de negociación establecido por el apartado i) del párrafo 31 había comenzado y que era importante encarrilarlo correctamente desde el principio. En vista de ello, lo más apropiado que podía hacer la OIMT era abstenerse de realizar comentarios sobre los asuntos que se estaban negociando. La OIMT había comunicado al CCMA y a su secretaría información sobre dicha Organización, en especial sobre su actual esfuerzo para integrar el comercio y el medio ambiente mediante la promoción del comercio internacional de maderas tropicales originarias de fuentes ordenadas de una manera sostenible (el Objetivo 2000 de la OIMT). Estaba dispuesta a contestar a cualquier solicitud adicional de información y aclaración sobre la OIMT por parte del Comité y su secretaría.

51. La CMNUCC agradeció también su invitación al CCMA en Sesión Extraordinaria. Reiteró que el apoyo mutuo era un objetivo acordado tanto por la Declaración de Doha como por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, dos regímenes que se encontraban en pie de igualdad. Deseaba que los Miembros del CCMA en Sesión Extraordinaria le formularan sus preguntas por escrito, en caso de que fueran de índole interpretativa y se refirieran a la relación entre ambos regímenes jurídicos, de modo que las pudiera hacer llegar a sus Partes y volver con sus respuestas. Precisó que, en su calidad de secretaría, su posición era delicada, y se consideraba una mensajera encargada de garantizar que la información circulara en los dos sentidos.

52. En respuesta a la pregunta de la Arabia Saudita, la CMNUCC llamó a la atención de los delegados el párrafo 5 del artículo 3 de la Convención, que establecía que "las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenibles de todas las Partes, particularmente de las Partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor forma a los problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional". Como Kuwait había señalado también a la Secretaría, al comunicar su información a la CMNUCC, no se había notificado ninguna repercusión negativa de las medidas y políticas adoptadas por las Partes. La CMNUCC añadía que el Protocolo de Kyoto todavía no había entrado en vigor, ni tampoco la disposición relacionada con el asunto planteado por la Arabia Saudita. El párrafo 3 del artículo 2 establecía que las Partes incluidas en el anexo I "se empeñarán en aplicar las políticas y medidas a que se refiere el presente artículo de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos, comprendidos los efectos adversos del cambio climático, efectos en el comercio internacional y repercusiones sociales, ambientales y

económicas, para otras Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo". El párrafo 3 del artículo 2 del Protocolo de Kyoto proseguía diciendo que "La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo podrá adoptar otras medidas, según corresponda, para promover el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo". Esperaba responder con ello a la pregunta de la Arabia Saudita.

53. El Protocolo de Montreal agradeció también al CCMA en Sesión Extraordinaria su invitación. Indicó que las Partes en el Protocolo habían adoptado una decisión ya muy entrado el año pasado, en virtud de la cual se exigía a la Secretaría que supervisara las negociaciones realizadas con arreglo al mandato de Doha e informara con regularidad de los progresos realizados. Las Partes en el Protocolo de Montreal eran conscientes de que las OCE contenidas en dicho Protocolo habían sido adoptadas por consenso internacional mediante negociaciones. Algunas de esas obligaciones comerciales no habían sido aplicadas cuando se consideró que no tenían valor real para fomentar los objetivos del Protocolo. En esos casos, las Partes en el Protocolo de Montreal habían adoptado las decisiones necesarias, en reconocimiento de estas dificultades prácticas. Las medidas comerciales del Protocolo de Montreal también habían sido complementadas por otras disposiciones favorables, para ayudar a los países en desarrollo y a los países con economías en transición a aplicar las medidas contenidas en el Protocolo de Montreal. Se trataba de asistencia técnica y financiera, transferencia de tecnología y creación de capacidad. Las medidas comerciales se negociaban también teniendo en cuenta las preocupaciones de la OMC y, en la medida de lo posible, se armonizaban con el artículo XX del GATT. Las 184 Partes en el Protocolo de Montreal, que trabajaban con denuedo para eliminar gradualmente todas las sustancias que agotan la capa de ozono, habrían tenido problemas si su tarea no hubiera contado con el complemento de las medidas comerciales y del artículo 4 del Protocolo. Estas medidas fomentaban los esfuerzos de protección del ozono y alentaban a las Partes y a los países que no eran Partes a ratificar el Protocolo de Montreal.

54. La secretaría del Ozono creía que su interacción con los AMUMA y la OMC era útil para el apoyo mutuo y debía proseguirse. Creía que el tipo de diálogo que precedió la conclusión del Protocolo de Montreal en 1987 con el GATT, en particular en relación con el artículo 4, referente a las medidas comerciales, que fue un motivo de grave preocupación, había sido útil. La comunidad internacional apreciaba que las medidas comerciales contenidas en el Protocolo de Montreal no hubieran entorpecido el comercio mundial, sino complementado los esfuerzos que se estaban realizando para fomentar el comercio libre y proteger el medio ambiente.

55. El Convenio de Basilea también agradeció al CCMA en Sesión Extraordinaria su invitación. Señaló que el Convenio había atribuido gran importancia a este debate y había participado activamente en las actividades y reuniones organizadas por el CCMA. Este año, había participado en el seminario regional de la OMC sobre comercio y medio ambiente en La Paz, Bolivia. El taller fue un foro productivo para el intercambio de información concreta sobre las obligaciones y las preocupaciones comerciales de los AMUMA. Dijo que la Secretaría participaría también en el próximo seminario regional de la OMC para África, que se celebraría en Sudáfrica, enviando a un representante del centro regional del Convenio de Basilea para los países africanos de habla inglesa en Pretoria. Los seminarios regionales representaban un importante instrumento para aumentar la capacidad de los gobiernos de establecer políticas bien fundadas y adoptar decisiones pertinentes. La Secretaría consideraba que la participación de los AMUMA en el CCMA en Sesión Extraordinaria era otro medio de alcanzar este objetivo.

56. Como reconocimiento de la importancia de las negociaciones que se estaban celebrando con arreglo a la Declaración de Doha y la utilidad del intercambio de información entre el CCMA en Sesión Extraordinaria y la secretaría del Convenio de Basilea, las Conferencias de las Partes en el Convenio de Basilea adoptó en su última reunión la Decisión VI/30, en virtud de la cual se encomienda a la Secretaría que solicite la condición de observador de la OMC en el CCMA en Sesión Extraordinaria. Con arreglo a esta Decisión, se envió una carta al Director General de la OMC el

28 de enero del presente año. En esa Decisión se encomendaba también a la Secretaría que comunicara información general a la OMC previa petición y que formulara a las Conferencias de las Partes en su próxima reunión preguntas relacionadas con la interpretación de las disposiciones del Convenio de Basilea. Esta Decisión era un paso hacia el fomento de un diálogo sostenible entre los dos regímenes, con objeto de potenciar su apoyo mutuo. Durante la presente reunión, se había hecho referencia al Convenio de Basilea en varias intervenciones, sobre las que se reflexionaría más a fondo. Hizo hincapié en que el Convenio de Basilea era un instrumento internacional dinámico y vivo, cuya finalidad era la protección de la salud humana y el medio ambiente. Los anexos a este Convenio se revisaban con regularidad, para adaptarlos cuando era necesario a los cambios científicos o tecnológicos o para armonizarlos con otros sistemas internacionales cuya labor estaba relacionada con los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.

57. La aplicación del Convenio era apoyada por las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes, el órgano legislativo del Convenio. Estas decisiones contenían enmiendas, directrices técnicas o normas de procedimiento adicionales, entre otros elementos. Las decisiones de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea siempre habían sido adoptadas por consenso y eran "reglas de oro" respetadas. En relación con la observación del Convenio de Basilea sobre el hecho de que todas las Partes aplicaban las decisiones de la Conferencia de las Partes, Egipto pidió información sobre las enmienda de la prohibición. Creía que varias Partes no consideraban esta enmienda obligatoria, porque el propio texto del Convenio de Basilea no prohibía categóricamente las exportaciones. Eso mostraba las dificultades que supondría examinar las decisiones de la Conferencia de las Partes, como habían propuesto las CE. El Convenio de Basilea confirmó que la Decisión II/12, adoptada durante la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, establecía una prohibición de las exportaciones de los países de la OCDE a los países que no eran miembros de dicha Organización. La Secretaría no había tenido conocimiento de ningún caso de incumplimiento de esta Decisión. Sin embargo, a algunas Partes les preocupaba que la condición jurídica de la Decisión no fuera lo suficientemente vinculante para que la prohibición se aplicara. Por lo tanto, en la reunión siguiente de la Conferencia de las Partes se adoptó la Decisión III/1, que contenía la llamada enmienda de la prohibición, que todavía no había entrado en vigor. De momento, la enmienda había sido ratificada por 36 Partes.

58. El PNUMA agradeció al CCMA en Sesión Extraordinaria su invitación. Consideraba vital promover una interacción amplia y sustantiva sobre la relación entre los AMUMA y la OMC en las negociaciones en curso, en las que participaban directamente funcionarios con responsabilidades y competencia técnica en el funcionamiento de ambos regímenes. Los gobiernos reconocieron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que el comercio era un instrumento capital de puesta en práctica del desarrollo sostenible. El PNUMA estaba dispuesto a ofrecer su competencia técnica para potenciar al máximo la eficacia del comercio para la consecución de esta meta, en el contexto del CCMA en Sesión Extraordinaria, y en relación con cualquier otro elemento del Programa de Doha para el Desarrollo que los Miembros consideraran idóneo. El hecho de que asistiera a la presente reunión recalaba al PNUMA y los AMUMA la importancia de estas negociaciones y ofrecía una apreciación más clara de las prioridades e inquietudes de los Miembros de la OMC. No obstante, también había subrayado la importancia de una comunicación eficiente y oportuna de información por parte de las secretarías de los AMUMA y del PNUMA. Esperaba que los Miembros de la OMC permitieran que los invitados con carácter *ad hoc* lo hicieran de una manera segura y previsible.

59. Turquía expresó su agradecimiento por la participación de los invitados con carácter *ad hoc*. Creía que los Miembros debían seguir buscando un consenso sobre los principios rectores de la relación entre la OMC y los AMUMA. Después de la Cumbre de la Tierra de Río se habían negociado numerosos AMUMA por consenso internacional. Por lo tanto, debían preservarse las medidas comerciales de los AMUMA, pero era importante garantizar que su aplicación no creara un obstáculo al comercio de los países en desarrollo, que debían recibir asistencia financiera y técnica, transferencias de tecnología y actividades de creación de capacidad.

60. El Brasil agradeció a las secretarías de los AMUMA y al PNUMA su participación y las opiniones formuladas sobre el apartado i) del párrafo 31. Creía que su participación era un paso adelante fundamental en las negociaciones realizadas en virtud del apartado ii) del párrafo 31, así como en relación con la cuestión de índole más horizontal de la concesión de la condición de observador en la OMC. Sin embargo, preguntó por el mandato preciso para la participación de los invitados con carácter *ad hoc* en las reuniones del CCMA en Sesión Extraordinaria. Venezuela apoyaba al Brasil y, junto con el Ecuador y Barbados, pidió que en el futuro se evitaran las superposiciones entre las reuniones de los AMUMA y del CCMA, puesto que el Convenio de Basilea había celebrado una reunión al mismo tiempo. Pidieron una mayor coordinación en el futuro entre la OMC, el PNUMA y los AMUMA. Los Estados Unidos dijeron que en la última reunión del CCMA en Sesión Extraordinaria se habían producido largos debates sobre la programación de las reuniones y que se había mostrado receptividad en cuanto a la conveniencia de evitar en lo posible la superposición de reuniones.

61. La Presidenta dijo que, aunque no había podido celebrar consultas informales sobre la forma que revestiría la participación de los invitados con carácter *ad hoc*, se organizarían consultas informales antes de la próxima reunión del 8 de julio de 2003 para tratar esta y otras cuestiones. Agradeció a los invitados con carácter *ad hoc* su participación constructiva. El debate le había parecido muy rico y basado en una combinación de los enfoques pragmático y conceptual.

II. APARTADO ii) DEL PÁRRAFO 31 – INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CRITERIOS PARA CONCEDER LA CONDICIÓN DE OBSERVADOR

62. Las Comunidades Europeas pidieron a las delegaciones que examinaran en la Conferencia Ministerial de Cancún el progreso realizado en relación con el apartado ii) del párrafo 31. Opinaban que podían consolidarse las invitaciones *ad hoc* al PNUMA y a los AMUMA en la Conferencia, de acuerdo con los criterios propuestos en la reunión de febrero del CCMA en Sesión Extraordinaria, y que los Ministros podían respaldar las sesiones informativas de los AMUMA en el CCMA. La consolidación del intercambio de información no modificaría el equilibrio institucional de la OMC.

63. Suiza acogía con satisfacción la sugerencia de las CE y esperaba una propuesta más concreta. La Argentina distinguió entre el mandato de negociación sobre los criterios para conceder la condición de observador y la consolidación en Cancún de la invitación con carácter *ad hoc* a los AMUMA y el PNUMA. Creía que esta última debía realizarse en función de criterios como la pertinencia del trabajo de los invitados para la labor del CCMA en Sesión Extraordinaria y la composición lo más universal posible de los invitados. El Brasil acogía con satisfacción la propuesta de las CE, pero deseaba que primero se definieran los AMUMA y se debatiera la modalidad de participación de los invitados. Tailandia pidió a las CE una aclaración sobre los AMUMA abarcados por la propuesta y los criterios que se utilizarían. Explicó que su apoyo a las invitaciones con carácter *ad hoc* se había basado en dicho carácter y en el hecho de que esta participación estaba vinculada a las cuestiones debatidas en el CCMA en Sesión Extraordinaria. Egipto no consideraba necesario consolidar las invitaciones *ad hoc* y subrayó que la cuestión de la condición de observador era de índole horizontal. Otras delegaciones manifestaron su interés por debatir más a fondo la propuesta de las CE. Las Comunidades Europeas dijeron que seguirían reflexionando sobre la cuestión de los criterios, pero que era importante no imponer condiciones elaborando criterios que dejaran sin sentido la recomendación. Añadieron que la decisión de los Ministros podía ir acompañada de una declaración que precisara que no prejuzgaba lo que se consideraría un "AMUMA" en las negociaciones en virtud del apartado i) del párrafo 31. También aclararon que su propuesta se limitaba al CCMA en Sesión Extraordinaria y no abarcaba las reuniones ordinarias del CCMA ni ningún otro órgano de la OMC. Con respecto al intercambio de información, explicaron que los Ministros se limitarían a dar su apoyo a una práctica existente y que no debía pedírseles que entraran en detalles (como el número de sesiones de información que debían celebrarse cada año).

A. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

64. La Presidenta resumió las principales propuestas formuladas en el CCMA en Sesión Extraordinaria sobre intercambio de información: 1) regularizar las sesiones informativas con los AMUMA y organizarlas con regularidad; 2) celebrar sesiones informativas sobre temas específicos agrupando los AMUMA que comparten intereses comunes; 3) hacer que otros Comités de la OMC organicen reuniones con los AMUMA, bien con la presencia del CCMA o por separado; 4) crear canales para el intercambio de información entre los representantes de los gobiernos encargados del comercio y los encargados del medio ambiente; 5) hacer que la Secretaría de la OMC organice actividades paralelas en las reuniones de la Conferencia de las Partes de los AMUMA de una manera más sistemática; 6) organizar proyectos conjuntos de asistencia técnica y creación de capacidad entre la OMC, el PNUMA y los AMUMA; 7) fomentar el intercambio de documentos respetando la información confidencial; y 8) establecer una base de datos electrónica sobre comercio y medio ambiente. La Presidenta invitó a los Miembros a formular observaciones sobre estos puntos y, en general, sobre el modo de hacer progresar el debate. La Presidenta llamó luego a la atención de los participantes un nuevo documento enviado por Suiza (TN/TE/W/30), que este país presentó.

65. Varias delegaciones, incluidos los Estados Unidos, Kenya y el Japón, coincidieron con la opinión de Suiza de que uno de los principales objetivos del intercambio de información era fomentar el apoyo mutuo y la coherencia entre los sistemas de medio ambiente y de comercio.

66. Al tiempo que apoyaban la necesidad de un intercambio regular de información, varias delegaciones, incluidas Cuba, Malasia, Egipto, Indonesia, Qatar, el Canadá, Tailandia y Kenya, expresaron su preocupación por las propuestas de Suiza y las CE de institucionalizar el intercambio de información.

67. Cuba y Egipto opinaban que la institucionalización del intercambio de información no se ajustaba a los parámetros del mandato. Cuba dijo que la consolidación de las prácticas existentes no debía conducir a un cambio en la condición actual de los AMUMA que participaban en la OMC, ni a la creación de una nueva estructura institucional. Consideraba que las propuestas suiza y comunitaria trascendían las prácticas actuales de intercambio de información entre los AMUMA y la OMC. Las Comunidades Europeas indicaron que la consolidación mediante una serie organizada de reuniones no exigía ningún cambio en las normas y procedimientos de la OMC, como sugería Cuba, y no alteraría el equilibrio institucional. Consideraban que, en términos de la frecuencia de las sesiones informativas, la prioridad debía consistir en demostrar que la OMC estaba realizando un esfuerzo para mejorar la gestión.

68. Malasia creía que el intercambio regular de información era importante. Las secretarías de los AMUMA que habían de participar en el intercambio podían determinarse según los criterios siguientes: 1) aquellas que pudieran optar a la condición de observador de la OMC con arreglo a los criterios que negociara el CCMA en Sesión Extraordinaria, y 2) aquellas que los Comités de la OMC acordaran por consenso. En cuanto a los órganos de la OMC que podían participar en el intercambio, el CCMA parecía el más obvio, aunque la decisión debería corresponder a cada órgano. Acogió con satisfacción las numerosas propuestas realizadas sobre el intercambio de información y añadió que también podían plantearse seminarios y talleres sobre creación de capacidad. Los órganos pertinentes de la OMC podían tomar por sí mismos decisiones sobre cuestiones como los temas de las sesiones informativas, los seminarios de creación de capacidad, etc. La propuesta suiza era un intento de gestión pormenorizada del proceso. Expresó su preocupación acerca de la institucionalización del intercambio de información, advirtiendo que había que tomar en consideración los recursos financieros y humanos de la OMC y de las delegaciones pequeñas.

69. Qatar, la Argentina, Kenya, e Indonesia apoyaron la declaración de Malasia. Kenya defendió también la idea de que se utilizase el sistema menos oneroso para el intercambio de información, cuestionando la necesidad de información adicional.

70. Egipto y el Canadá consideraban que la frecuencia de las reuniones no debería estar predeterminada por necesidades y requisitos que podían cambiar, sino ir adaptándose a esas necesidades y requisitos. Venezuela manifestó su acuerdo con esta opinión. Kenya se mostró de acuerdo y dijo que lo importante era el progreso, y no la frecuencia. Los Estados Unidos indicaron que la celebración de sesiones informativas con los AMUMA dos veces al año podía ser excesivamente ambiciosa. El Canadá consideró que una reunión regular con los AMUMA podía ser suficiente. Tailandia señaló que la práctica actual era apropiada.

71. Los Estados Unidos acogieron con satisfacción la comunicación suiza, considerándola una aportación importante. Manifestaron su acuerdo con los párrafos 3, 4 y 5 de la comunicación, así como con la idea de que existían ventajas potenciales significativas en aumentar la cooperación. Consideraron útiles los datos aportados en el párrafo 8 sobre la regularización de las sesiones informativas de la OMC y los AMUMA.

72. Australia dijo que un mejor intercambio de información podía desempeñar una función importante, tanto a nivel nacional como internacional, para instaurar la confianza y la comprensión entre los funcionarios encargados del comercio y el medio ambiente. El documento suizo era una contribución útil a este respecto. Además del trabajo realizado en la OMC, Australia subrayó la necesidad de tener en cuenta las actividades en otros foros nacionales, regionales o internacionales y, en este contexto, mencionó la próxima celebración de un taller sobre comercio y medio ambiente del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC).³

73. El Canadá subrayó la importancia de los procesos nacionales e internacionales de coordinación para elaborar regímenes de comercio y medio ambiente que se apoyaran mutuamente. Era necesario tomar más activamente medidas para facilitar la elaboración de procedimientos de intercambio de información entre las secretarías de los AMUMA y los Comités de la OMC y la elaboración de criterios para la concesión de la condición de observador. El Canadá reconocía la contribución positiva de los procesos informales de intercambio de información, que propiciaban una corriente de información útil cuando dichos procesos se llevaban a cabo de una manera que fomentara el diálogo abierto. Sin embargo, el Canadá creía que, aparte de las sesiones informativas con los AMUMA, existían varios mecanismos de intercambio de información, incluyendo el intercambio de documentos, el patrocinio conjunto de actos, las reuniones de las secretarías, los simposios, los seminarios y talleres regionales, los proyectos de asistencia técnica y las páginas Web. Reconocía el valor de centrarse en cuestiones específicas y celebrar reuniones regionales específicas. El tipo de información que debía intercambiarse era variado e incluía: información básica sobre la competencia técnica de los órganos, la investigación o el análisis en esferas de interés común, la información sobre bases de datos, las reuniones programadas, los resúmenes de los debates, los adelantos y las nuevas cuestiones y las actividades de creación de capacidad y de asistencia técnica. Señaló la ventaja de recabar información de los AMUMA sobre el valor potencial de los diversos mecanismos de información y los diversos tipos de información. Debido a las limitaciones de que adolecían las secretarías de los AMUMA, consideraba que la Secretaría de la OMC debía recabar las opiniones de los AMUMA sobre el intercambio de información de una manera estructurada, por ejemplo mediante un cuestionario.

74. Nueva Zelandia no estaba convencida de la necesidad de tratar la relación jurídica entre las disposiciones sobre comercio de los AMUMA y las normas de la OMC; consideraba que se debía

³ Este taller se celebró en Bangkok los días 19 y 20 de mayo de 2003.

intentar mejorar el apoyo mutuo de ambos regímenes a nivel práctico. Para reducir los riesgos de conflicto, se mostró de acuerdo con el Canadá en que había que seguir centrándose en el plano nacional, tanto para la negociación como para la aplicación de los acuerdos sobre comercio y medio ambiente. A nivel intergubernamental, consideraba importante confirmar la condición de observador de los AMUMA en el CCMA en Sesión Extraordinaria, así como intercambiar información. Con respecto a los procedimientos de intercambio de información, opinaba que la cuestión clave era cómo mantener cierto grado de flexibilidad al tiempo que se establecía cierta regularidad y coherencia, con objeto de preservar el valor del intercambio.

75. Chile reconoció las ventajas asociadas a un aumento de la cooperación entre la OMC y los AMUMA, como se proponía en el documento suizo. Sin embargo, consideraba que la flexibilidad inherente a los acuerdos actuales era valiosa. Señaló que debía evitarse la regularización de las prácticas actuales o la imposición de criterios estrictos. En lugar de ello, la prioridad debía consistir en instar a los Miembros a que intensificaran la cooperación, por ejemplo mediante los métodos sugeridos por el Canadá y Suiza.

76. El Brasil indicó que atribuía gran importancia a este aspecto de las negociaciones y expresó su apoyo a un intercambio más regular de la información. Se mostró de acuerdo con las propuestas realizadas en la sesión informativa de los AMUMA de noviembre, incluida la celebración de sesiones informativas sobre temas específicos, la potenciación del intercambio de documentos y el fomento o la actualización de las bases de datos. También apoyó la propuesta de Malasia sobre la creación conjunta de capacidad, y la sugerencia canadiense sobre los proyectos y simposios de asistencia técnica. Aunque el Brasil no estaba en condiciones de presentar opiniones definitivas sobre la institucionalización de las sesiones informativas, compartía las opiniones de Suiza sobre la potenciación del intercambio de información. En relación con el párrafo 9 del documento de Suiza, expresó su creencia de que la OMC debía seguir encargándose de convocar reuniones conjuntas para debatir elementos específicos del mandato de Doha. Respaldó los comentarios de Chile sobre el párrafo 10 del documento suizo.

77. El Japón acogió con satisfacción el documento suizo, considerándolo una contribución valiosa. Indicó su apoyo a la sugerencia de que unas sesiones informativas institucionalizadas o más específicas reportarían ventajas, como se destacaba en el párrafo 5 del documento suizo. Con respecto a las formas de organizar mejor el intercambio de información entre las secretarías de los AMUMA y los Comités de la OMC, el Japón apoyó las observaciones realizadas por Suiza en los párrafos 8 y 11 de su documento.

78. Venezuela agradeció a Suiza su documento que, junto con las comunicaciones anteriores de las CE y los Estados Unidos, contribuiría a facilitar la progresión del debate. Consideró útil el párrafo 3 de la comunicación suiza, en particular en relación con la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la necesidad de coherencia. Se proponía que se planteara a los AMUMA la cuestión de la coherencia entre el trato especial y diferenciado con arreglo a la OMC y la responsabilidad común pero diferenciada con arreglo a la Declaración de Río y a los AMUMA. A este respecto, mencionó el mandato específico de la Declaración Ministerial en relación con el trato especial y diferenciado. Consideraba confortante que se atribuyera importancia en el párrafo 5 de la propuesta suiza a la coordinación nacional e internacional, la creación de capacidad y la transferencia de tecnología. Expresó su apoyo a la propuesta de que se estructuraran las reuniones, aunque no era partidario del término "institucionalización". Solicitó aclaración sobre la cuestión del trato recíproco en el párrafo 17 del documento suizo.

79. Indonesia dijo que los procedimientos de intercambio de información debían tener la finalidad de brindar a los Miembros la oportunidad de recopilar y mejorar sus conocimientos sobre los efectos del comercio y el desarrollo en el medio ambiente desde el punto de vista de los AMUMA. Expresó la opinión de que el mandato se limitaba a los procedimientos de intercambio regular de información

y, por lo tanto, las negociaciones no debían prejuzgar las cuestiones que debían debatirse en un futuro intercambio de información. Las sesiones de intercambio de información debían centrarse en cuestiones específicas y la asistencia de los AMUMA debía determinarse de acuerdo con dichas cuestiones. Indonesia opinaba que la utilización de Internet podía potenciar el intercambio de información entre la OMC y los AMUMA. Señaló su preferencia por una adaptación de la página Web existente y el análisis de los vínculos entre las páginas Web de la OMC y los AMUMA.

80. Suiza respondió a las observaciones realizadas. Sobre la cuestión de la institucionalización de las sesiones informativas de los AMUMA, la propuesta tenía la finalidad de lograr una organización más eficiente de las sesiones, más que un cambio estructural en la organización del trabajo. Se hizo hincapié en una mayor regularidad, como establecía el mandato. Suiza manifestó su acuerdo con el comentario de Nueva Zelanda sobre el equilibrio entre flexibilidad y regularidad. Aunque en el documento se proponían dos reuniones, consideraba que la prioridad no debía ser el número de reuniones, sino su regularidad. También era importante la coordinación, debido a la sobrecarga de trabajo que padecían algunas delegaciones. Señaló que debían tenerse en cuenta las propuestas de Malasia sobre los diferentes tipos de cooperación.

81. La Presidenta señaló que se habían realizado propuestas valiosas y que el CCMA en Sesión Extraordinaria debía analizar cómo combinarlas. Destacó que la información de los AMUMA sobre el valor potencial de estos mecanismos de intercambio de información, así como los diferentes tipos de información, serían útiles para el debate.

B. CONDICIÓN DE OBSERVADOR

82. En relación con la condición de observador, la Presidenta pidió a las delegaciones que se centraran específicamente en la identificación de los criterios y de los Comités de la OMC afectados por este mandato. La nueva comunicación suiza, recogida en el documento TN/TE/W/30, también se debatió en relación con la condición de observador.

83. Egipto, Kenya, Indonesia, y Malasia observaron que la cuestión de la condición de observador era de tipo horizontal y debía resolverse y fijarse en el conjunto de la organización. Varias delegaciones afirmaron que había que aguardar al resultado de los debates en el Consejo General y el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC). Cuba añadió que tenía preocupaciones sistémicas en torno a la propuesta suiza. Los Estados Unidos acogieron con satisfacción la comunicación suiza sobre la condición de observador y señalaron que la cuestión de los criterios para la concesión de la condición de observador había sido abordada en un documento anterior de los Estados Unidos.⁴ Indonesia compartía la opinión de Suiza de que la condición de observador debería basarse en la reciprocidad y la relación de los AMUMA en cuestión con el trabajo de la OMC.

84. El Brasil dijo que, aunque era posible trabajar a partir de las directrices para la concesión de la condición de observador que se establecen en el anexo 3 de los Reglamentos de los períodos de sesiones de la Conferencia Ministerial y de las reuniones del Consejo General, era necesario perfeccionarlas. La Argentina señaló que, en lo referente a las reuniones ordinarias, por oposición a las reuniones de los órganos negociadores, el Anexo 3 sería inadecuado y serían precisos otros elementos.

85. Malasia, con el apoyo de Qatar, acogió con satisfacción la presencia de los AMUMA seleccionados en las reuniones del CCMA en Sesión Extraordinaria. Las normas de procedimiento vigentes establecían que esa participación se decidiera caso por caso, y que las organizaciones a las que se hubiera concedido la condición de observador en un determinado órgano no recibieran automáticamente dicha condición en otros órganos. Malasia se mostró de acuerdo con el Brasil en

⁴ Documento TN/TE/W/5.

que era necesario un mandato para regular la participación de los AMUMA en las reuniones del CCMA en Sesión Extraordinaria.

86. Australia opinaba que el documento suizo destacaba un conjunto de razones juiciosas y prácticas por las que podía ser útil la presencia de los AMUMA con carácter más permanente en los debates futuros. Aunque era sensible a las cuestiones más amplias planteadas por las delegaciones, expresó su esperanza de que pudiera progresarse en este asunto, en especial en el CCMA en Sesión Extraordinaria, para poder beneficiarse de las sinergias que en su opinión se producirían gracias a una participación más ponderada de los AMUMA en los debates.

87. El Canadá sugirió que la Secretaría de la OMC preparara un cuestionario, que se enviaría a todas las secretarías de los AMUMA potencialmente pertinentes para aclarar cuáles eran sus intereses prioritarios. Con objeto de facilitar las respuestas, el cuestionario debía comportar un breve resumen del mandato y de las actividades clave de cada Comité de la OMC. Una compilación de esas respuestas ayudaría a los Miembros a tener una comprensión cabal y pormenorizada de los intereses de los AMUMA.

88. Chile y el Japón opinaron que el debate horizontal sobre la condición de observador no suponía un obstáculo para que se debatiera esa cuestión en el CCMA en Sesión Extraordinaria de conformidad con su mandato específico. Chile consideraba que el debate en el CCMA en Sesión Extraordinaria podía servir de orientación y dar un impulso al debate horizontal. En la siguiente reunión debía realizarse un examen más detenido de la cuestión de los criterios para la participación de los AMUMA, como mencionaba Suiza en el párrafo 17 de su documento. El Japón dijo que la cuestión de la concesión de la condición de observador debía considerarse en función de las ventajas que reportaría al trabajo del CCMA en Sesión Extraordinaria. Expresó su apoyo a la propuesta suiza de que el párrafo 20 constituyera el fundamento para la concesión de la condición de observador y la elaboración de directrices más detalladas; consideró pragmático y positivo el enfoque de la asistencia *ad hoc* preconizado en el párrafo 23; y opinó que la contribución de las secretarías de los AMUMA era importante y valiosa para el progreso del trabajo en el CCMA en Sesión Extraordinaria.

89. Nueva Zelandia acogió con satisfacción la comunicación suiza. Consideró acertado el enfoque adoptado sobre los criterios mencionados en la Parte 3 del documento para la concesión de la condición de observador, en relación con la flexibilidad de los criterios y el hincapié hecho en el interés y la participación en la política comercial. Tomó nota del apoyo a la regularización de la condición de observador, capital para el mandato y específico a las negociaciones.

90. Suiza agradeció a los delegados sus respuestas y preguntas. En cuanto al hecho de que la concesión de la condición de observador fuera una cuestión horizontal, reiteró su posición de que el debate sobre esta cuestión en el Consejo General y el CNC no era un obstáculo y que el CCMA en Sesión Extraordinaria tenía un mandato específico. En respuesta al comentario de Chile sobre el párrafo 17, indicó que el criterio del "interés directo" se había tomado directamente del Anexo 3 de los Reglamentos de los períodos de sesiones de la Conferencia Ministerial y de las reuniones del Consejo General. Por interés directo se entendía el interés directo en las negociaciones contempladas en la Declaración de Doha sobre comercio y medio ambiente, es decir, sobre la concesión de la condición de observador en el CCMA y en el CCMA en Sesión Extraordinaria. En respuesta a la pregunta de Venezuela sobre el trato recíproco, explicó que la concesión de la condición de observador a los AMUMA en la OMC provocaría la expectativa de que se otorgara a la OMC la condición de observador en AMUMA de que se tratara, aunque observó que hasta la fecha no habían surgido problemas al respecto.

91. La Presidenta llegó a la conclusión de que los Miembros debían seguir reflexionando sobre los criterios para la concesión de la condición de observador con objeto de alcanzar el consenso. Se

alentaba a los Miembros a centrarse en el mandato conferido al CCMA en Sesión Extraordinaria y a tratar de progresar a partir de los debates de la reunión de febrero.

III. APARTADO iii) DEL ARTÍCULO 31 – BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

92. La Presidenta señaló a la atención de los Miembros el nuevo documento de Qatar, con la signatura TN/TE/W/27. Informó también a los Miembros de la reciente distribución en una reunión ordinaria del CCMA de un documento de la OCDE en el que se comparan las listas de los bienes ambientales del APEC y de la OCDE.⁵

93. Qatar señaló que su comunicación era una respuesta a las peticiones de las delegaciones de que ofreciera los códigos del Sistema Armonizado correspondientes a los productos citados en su propuesta anterior⁶ de inclusión de los productos y tecnologías relacionados con el gas natural en la lista de bienes ambientales de la OCDE. Se especificaban cinco factores. En primer lugar, para clasificar bienes como ambientales era preciso examinar la forma en que estos bienes añadían valor al medio ambiente, es decir, cómo contribuían a alcanzar los objetivos ambientales. En segundo lugar, los objetivos ambientales podían clasificarse como mundiales o locales, y los primeros se alcanzaban a través de los AMUMA. Los bienes ambientales abarcados en la propuesta y pertinentes para la CMNUCC contribuían a ambos tipos de objetivos. En tercer lugar, las ventajas ambientales de los bienes incluidos en cualquier lista de la OMC debían ser cuantificables científicamente. Los productos relacionados con la energía, como los propuestos por Qatar, tenían un gran valor añadido ambiental y eran fácilmente cuantificables. En cuarto lugar, también el volumen del comercio debía ser cuantificable. En quinto lugar, dado que la dimensión de desarrollo era un factor capital para los países en desarrollo, las propuestas de los países en desarrollo debían tenerse en cuenta en las negociaciones de la OMC.

94. El Canadá, los Estados Unidos y Australia agradecieron a Qatar su comunicación y señalaron que las comunicaciones sobre bienes ambientales eran útiles cuando iban acompañadas de los códigos del SA. El Canadá también consideraba útil la identificación de los criterios de selección. Malasia acogió con satisfacción la comunicación de Qatar por su impresionante lista. Egipto manifestó su creencia de que las dos categorías, las turbinas de gas y los productos relacionados con el gas, eran bienes ambientales. Seguiría apoyando esta clasificación a menos que fuera refutada por un consenso en la definición o un argumento convincente. Nueva Zelanda indicó que la comunicación suplementaria contribuiría al análisis de la comunicación anterior por Qatar.

95. Los Estados Unidos subrayaron que era necesaria una definición clara de los bienes ambientales para elaborar una modalidad de liberalización del acceso a los mercados. Recalaron los factores fundamentales de la historia de la lista del APEC, para informar la labor actual de la OMC. Subrayaron la prioridad de la lista del APEC, es decir, la aplicación práctica, debido a su utilización como punto de partida para la liberalización de los aranceles. Señalaron los enfoques pragmáticos adoptados por los Miembros del APEC, incluyendo: las cuestiones relacionadas con la administración aduanera; la prohibición de la utilización de los certificados de usuario final y de la designación de los procesos y métodos de producción (PMP); el enfoque incluyente adoptado para cuestiones de uso doble; la utilización de las partidas arancelarias del SA en función de la prevalencia de los bienes ambientales en determinada partida arancelaria y su importancia para la industria ambiental. Se indicó que la lista del APEC estaba compuesta por una combinación de bienes incluidos en dos grandes categorías: la primera categoría comportaba la aplicación de remedios en relación con el medio ambiente o de medidas en las etapas finales de la producción y la prevención de

⁵ Este documento se ha distribuido con las signaturas WT/CTE/W/228 y TN/TE/W/33.

⁶ Documento TN/TE/W/19 y Corr.1.

la contaminación, y la segunda categoría incluía los bienes inocuos para el medio ambiente o "tecnologías limpias". Se reconoció que la lista del APEC excluía por razones prácticas productos que de lo contrario se habría debido incluir desde un punto de vista estrictamente conceptual. La lista de la OCDE se distinguía por su orientación más teórica.

96. El Canadá, los Estados Unidos, Suiza, y Australia consideraban la lista del APEC un punto de partida útil para la clasificación de los bienes ambientales. Estaban dispuestos a estudiar nuevas propuestas de adiciones a esta lista y acogerían con satisfacción las comunicaciones de los Miembros. Suiza también apoyaba la utilización de la lista de la OCDE como punto de partida. Sin embargo, recalcó que estas listas no serían suficientes y se estaba examinando actualmente los demás bienes cuya inclusión podía proponerse. Los Estados Unidos y el Canadá recalcaron la importancia de la flexibilidad para garantizar que la lista de bienes ambientales tuviera en cuenta los intereses de un amplio grupo de Miembros de la OMC.

97. Kenya y la India dijeron que la lista del APEC no era el punto de partida apropiado para las negociaciones. Kenya defendía la misma opinión sobre la lista de la OCDE, por el motivo de que estas listas no eran del interés de los países en desarrollo. Consideraba necesario elaborar una lista de los bienes ambientales que contuviera los productos de interés real o potencial para las exportaciones de los países en desarrollo, para que pudieran tener una función positiva. Opinaba que el CCMA en Sesión Extraordinaria debía definir los bienes ambientales para ayudar a progresar al Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados para los productos no agrícolas en las negociaciones sobre los bienes ambientales. Se pidió una aclaración sobre los foros pertinentes en relación con los productos agrícolas y sobre el tratamiento de los productos agrícolas que podían ser considerados bienes ambientales. Malasia opinaba que había algunos artículos en la lista del APEC que podían clasificarse como ambientales, mientras otros no podían clasificarse así. Se consideraba que también había que estudiar el uso múltiple de los productos. Por estas razones, la lista del APEC debía perfeccionarse. Expresó su interés en contribuir a la lista en relación con los bienes de interés para las exportaciones de los países en desarrollo. Sin embargo, recalcó la dificultad para los países en desarrollo de contribuir sustantivamente a la lista y obtener datos pertinentes. Al tiempo que reconocía las dificultades de los países en desarrollo, Suiza consideraba que era importante que presentaran propuestas relacionadas con los bienes ambientales basadas en sus intereses. Los Estados Unidos expresaron su interés en escuchar qué productos podían ser de interés para los países en desarrollo. La India opinaba que era necesario debatir sobre la conveniencia de que el CCMA en Sesión Extraordinaria trabajara en la aclaración del concepto de bien ambiental para las negociaciones realizadas en el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados.

98. La Presidenta señaló que las observaciones de Kenya planteaban cuestiones que se hallaban dentro de las responsabilidades del CCMA en Sesión Extraordinaria. Era necesario cooperar con el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados en relación con las cuestiones de definición y la coordinación general. Debía examinarse el enfoque de la UNCTAD sobre los bienes ambientales.

99. Las Comunidades Europeas comentaron que, aunque la lista del APEC tenía una finalidad ilustrativa, no tenía validez en el marco de las negociaciones del Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados o del CCMA en Sesión Extraordinaria. Observaron que en las intervenciones se había concedido prioridad a los problemas, en lugar de a las soluciones. Se reconoció el problema del uso final y los posibles problemas asociados a los PMP. Las CE consideraban que el entorno actual podía distinguirse de los contextos pasados y que la cuestión de los PMP debía tratarse con amplitud de miras. La mejora del acceso a los mercados podía considerarse opuesto a las restricciones al comercio por razones relacionadas con los PMP. Debía estudiarse qué productos podían beneficiarse de un enfoque de ese tipo. El problema real de las listas actuales era que daban mayor peso a un grupo determinado de Miembros y podían dificultar el avance. Los Estados Unidos discrepaban de la opinión de que la lista del APEC no tenía validez, puesto que varias delegaciones opinaban que podía usarse como punto de partida en las negociaciones.

100. Nueva Zelanda dijo que la lista del APEC se había distribuido en junio de 2002⁷ para dar impulso a las negociaciones, y no para imponer el enfoque de Asia y el Pacífico ni para instar a su adopción. La lista del APEC se consideraba un buen punto de referencia debido a sus buenos antecedentes en la OMC, al hecho de que hubiera sido elaborada por grupo variado, a que concediera prioridad a la liberalización sectorial y a que adoptara un enfoque pragmático. La cuestión pertinente era qué conclusiones podían extraerse del ejercicio del APEC que pudieran ser aceptables y aplicables ampliamente, incluidos los elementos de definición y proceso que podían contribuir a conformar algunas directrices. La lista del APEC se consideraba un punto de referencia útil en términos de identificación de las razones de que los productos se incluyeran o no en la lista. Las cuestiones pertinentes planteadas por los Estados Unidos eran las siguientes: la base de liberalización arancelaria de la lista del APEC frente a la lista de la OCDE, de carácter más conceptual; y la prioridad de aplicación práctica en relación con la administración aduanera, el uso doble, las cuestiones de nomenclatura y las cuestiones jurídicas de la OMC. Esta parte del mandato era importante y tendría que reportar ventajas tanto ambientales como de acceso a los mercados, y estas últimas debían ser favorables a los países en desarrollo.

101. El Canadá y Australia apoyaban la utilización de criterios relacionados con el uso final como punto de partida para las negociaciones. Australia dijo que los problemas planteados por los criterios del uso final se resolvían más fácilmente que las cuestiones que surgían, por ejemplo, en relación con los PMP, el análisis del ciclo de vida de los productos y los beneficios ambientales relativos. Expresó su interés en que se desarrollara más la propuesta en cuanto a la identificación de los productos del Código del SA considerados más inocuos ambientalmente. En relación con las opiniones expresadas por Suiza en la reunión del CCMA en Sesión Extraordinaria los días 12 y 13 de febrero de 2003, Australia no veía cómo podían ponerse en práctica criterios basados en la eficiencia o los resultados ambientales, o en qué diferían dichos criterios de los basados en los PMP.

102. Los Estados Unidos, Australia, Malasia y Egipto se oponían por razones prácticas a la inclusión de los bienes definidos en función de sus procesos y métodos de producción (PMP). Australia consideraba que el enfoque basado en los PMP no contribuiría a la liberalización del comercio y tendría pocos beneficios ambientales. Malasia manifestó su acuerdo con el párrafo 4 de la comunicación de Qatar de que era esencial que los bienes se seleccionaran según criterios de uso final. Consideraba que la propuesta de las CE parecía seguir basándose en el proceso. Egipto señaló que no estaba convencido por los comentarios de las CE sobre los PMP en relación con la posibilidad de un acceso positivo a los mercados y con la distinción respecto de cuestiones anteriores de restricciones de acceso a los mercados.

103. Qatar reiteró su propuesta de que los beneficios relativos de los productos fueran el criterio fundamental y señaló que tanto los criterios de uso final de los productos como de PMP conllevaban ciertos problemas. Recalcó el problema que el uso final tenía para los países en desarrollo en relación con la cuestión de la eliminación. Sugirió que las negociaciones se basaran en una nueva lista que contuviera cuatro categorías: 1) bien ambiental propuesto; 2) beneficio ambiental científico y cuantificable de cada bien; 3) volumen del comercio; y 4) identificación de los principales productores. Subrayó que la identificación de los principales productores era la cuestión fundamental para los países en desarrollo. Manifestó la opinión de que cuando en un AMUMA se hubiera identificado el beneficio ambiental de un producto, por ejemplo el gas natural en el contexto de las negociaciones sobre el cambio climático, este hecho debía reflejarse también en el CCMA en Sesión Extraordinaria.

104. La Presidenta pidió a las delegaciones que propusieran definiciones de los bienes ambientales e identificaran los bienes ambientales exportados e importados pertinentes.

⁷ Documento TN/TE/W/6, 6 de junio de 2002.

IV. OTROS ASUNTOS

105. Venezuela reiteró la pregunta que le había hecho a la Presidenta en la reunión del CCMA en Sesión Extraordinaria celebrada los días 12 y 13 de febrero de 2003 en relación con la orientación del CCMA en Sesión Extraordinaria sobre el párrafo 51 de la Declaración de Doha, y observó que la Presidenta había manifestado su intención de consultar a otras presidencias, incluida la del Comité de Comercio y Desarrollo y quizás también la del Consejo General. La Presidenta indicó que la cuestión podía tratarse en el punto del orden del día "Otros asuntos" de la siguiente reunión prevista para el 8 de julio de 2003.
